

Conciencia fiscal y presupuestos participativos: un estudio exploratorio

Fiscal Awareness and Participatory Budgeting: An Exploratory Study

**Gloria Alarcón García, José Manuel Mayor Balsas
y Claudia María Quintanilla Domínguez**

Palabras clave

Ciudadanía
 • Conciencia fiscal
 • Modelo de ecuaciones estructurales
 • Políticas públicas
 • Presupuesto participativo

Key words

Citizenship
 • Fiscal Awareness
 • Structural Equation Modelling
 • Public Policies
 • Participatory Budgeting

Resumen

Los trabajos que asocian presupuestos participativos e ingresos fiscales son escasos siendo, además, inexistentes los que tratan de encontrar una relación de causalidad potencial entre participar en este tipo de procesos e incrementar el cumplimiento tributario de los individuos. Por ello, con el presente trabajo se pretende dar un pequeño paso hacia adelante aportando evidencia empírica a este respecto. Partiendo de 530 cuestionarios de un municipio que cuenta con una determinada trayectoria participativa, y mediante un sistema de ecuaciones estructurales, se demuestra cómo el hecho de participar activamente en un proceso de presupuestos participativos podría dar lugar a una mayor conciencia fiscal.

Abstract

There is a paucity of research that has linked participatory budgeting to tax revenues, and no studies that have attempted to find a potential causal relationship between participating in this type of process and increasing individuals' tax compliance. This paper therefore seeks to make a small contribution to the field by providing empirical evidence on this topic. Based on 530 questionnaires from a municipality with a track record in participatory processes, a system of structural equations was used to show how active engagement in a participatory budgeting process could lead to greater fiscal awareness.

Cómo citar

Alarcón García, Gloria; Mayor Balsas, José Manuel y Quintanilla Domínguez, Claudia María (2022). «Conciencia fiscal y presupuestos participativos: un estudio exploratorio». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 177: 69-88. (doi: 10.5477/cis/reis.177.69)

La versión en inglés de este artículo puede consultarse en <http://reis.cis.es>

Gloria Alarcón García: Universidad de Murcia | gloria@um.es

José Manuel Mayor Balsas: Universidad de Murcia | josemanuel.mayor@um.es

Claudia María Quintanilla Domínguez: EGADE (México) | claudia.quintanilla@tec.mx

INTRODUCCIÓN

El cumplimiento fiscal es una condición básica para que un sistema tributario pueda considerarse eficiente y equitativo. Un comportamiento fiscal correcto es un síntoma, y a la vez una consecuencia, de una sólida conciencia cívica (Delgado, 2009). En este sentido, la moral fiscal se ha definido tradicionalmente como la motivación intrínseca de los individuos para pagar impuestos (Frey y Torgler, 2007; Torgler, 2005) o como el conjunto de factores de los que depende la permisividad social hacia el fraude fiscal (Prieto, Sanzo y Suárez, 2006). Hace alusión a las situaciones en que, frente a una igualdad de oportunidades, algunos contribuyentes evaden y otros siempre cumplen con sus obligaciones fiscales (Giachi, 2014). La conciencia fiscal, sin embargo, se describe como la percepción individual de cada ciudadano en cuanto a la ética fiscal y la moral tributaria de la sociedad en la que vive y que le lleva al voluntario cumplimiento de sus obligaciones fiscales (Alarcón, Beyaert y Pablos, 2012). Es, por tanto, un concepto más riguroso y restrictivo que el concepto de moral tributaria. Los individuos que presentan una elevada conciencia fiscal pagarán sus impuestos voluntariamente, independientemente de lo que hagan los demás, de lo que la moral colectiva del grupo considere que se debe hacer, y con independencia de las posibilidades de la persona para cometer fraude fiscal (Alarcón, Beyaert y Pablos, 2015).

Hasta la fecha, la mayor parte de los estudios que relacionan cumplimiento tributario con participación ciudadana han focalizado su atención en el capital social o en la democracia directa. Según la literatura, el capital social, medido a través de sus componentes —confianza, normas sociales y redes sociales— se relaciona positivamente con la moral tributaria (Alm y Gómez, 2008; Schelling, 1989; Torgler

et al., 2008), existiendo, asimismo, una relación entre dichos componentes. En este sentido, la transparencia y la rendición de cuentas generan en los ciudadanos un incremento de la confianza y la credibilidad en las instituciones (Azar, Gerstenblüth y Rossi, 2010), lo que se asocia con una mayor moral tributaria (Arias, 2008) y una mayor conciencia fiscal (Martínez y Miquel, 2013). Además, cuanto mayor sea dicha confianza es más probable que los individuos participen en su comunidad (Zmerli, Newton y Montero, 2007), y parece razonable pensar también que es más probable que se asocien políticamente. En términos generales, parece igual de probable que las personas que confían tiendan a asociarse como que las personas que se asocian tiendan a confiar, sin embargo, según diversos estudios, la primera de las afirmaciones ha resultado tener un mayor peso que la segunda (Newton, 2001; Zmerli, Newton y Montero, 2007). De igual modo, las personas más activas en la vida comunitaria tienden menos —incluso en privado— a aprobar el fraude en el pago de impuestos (Putnam, 2002). Las asociaciones inculcan en sus miembros hábitos de cooperación y sentimientos públicos, así como las destrezas prácticas necesarias para participar en la vida pública (Almond y Verba, 1970; Putnam, 2002), siendo sus miembros mucho más propensos que los no miembros a participar en la política o a pasar más tiempo con sus vecinos (Putnam, 1995). Si la condición de miembro organizado favorece el desarrollo de una ciudadanía democrática, es de esperar que los miembros de una asociación, a diferencia de los que no son miembros, tengan mayor confianza en su capacidad o posibilidades para influir en el Gobierno, sean más «abiertos» en sus opiniones políticas y, en general, se sientan más comprometidos con los valores democráticos (Almond y Verba, 1970). Los individuos que pertenecen a asociaciones políticas demuestran

un cierto comportamiento cívico, dado que los ciudadanos políticamente interesados tenderán a asociarse y participar en debates, donde podrán identificar las preferencias de otros, reduciéndose así su justificación de la evasión fiscal (Sá, Martins y Gomes, 2014). Asimismo, la pertenencia a asociaciones de carácter político puede facilitar la participación, dado que tener curiosidad sobre la política a menudo va acompañado de una participación real (Morales, 2001; Deth y Elff, 2004).

Por otro lado, los trabajos que versan sobre moral tributaria y democracia directa se han limitado a observar las diferencias entre residir o no en regiones con dicho sistema democrático, constatando la evidencia empírica la existencia de una relación positiva y significativa entre este tipo de democracia y el pago de los impuestos (Feld y Frey, 2002; Torgler, 2005; Torgler, Schneider y Schaltegger, 2010). Este hecho ha supuesto: 1) limitar el estudio de ambas variables a países o regiones donde está instaurado este tipo de democracia, 2) ceñirse a la mera correlación entre las variables democracia directa y cumplimiento fiscal, y 3) dejar al margen la propia participación individual de la ciudadanía, dado que solo se ha considerado la existencia o no de instrumentos participativos, no si los individuos finalmente participan en los mismos. En España, si bien se cuenta con mecanismos como el referéndum o la iniciativa legislativa popular, lo cierto es que la normativa vigente no facilita su empleo frecuente (Subirats, 2001). No obstante, en las democracias representativas se dispone de instrumentos o mecanismos participativos de base personal que se componen de varios elementos de democracia directa o semidirecta, como son los presupuestos participativos (Cabannes, 2004a; Goldfrank, 2006).

Por ello, con el presente trabajo se pretende dar un pequeño paso hacia adelante aportando evidencia empírica a este res-

pecto, supliendo así el vacío existente en la literatura al contrastar la hipótesis de que el hecho de participar activamente en un proceso de presupuestos participativos da lugar, potencialmente, a una mayor conciencia fiscal de los individuos. El trabajo se ha estructurado del siguiente modo: en primer lugar, se realiza una breve revisión de la literatura sobre presupuestos participativos y sus posibles relaciones con el cumplimiento tributario; posteriormente, se propone un estudio exploratorio, donde se detallan los objetivos y las hipótesis, la muestra utilizada, se describen tanto las variables como el modelo, y se concluye con los resultados obtenidos; por último, se exponen las conclusiones que, a modo de resumen, realizan un balance de los aspectos más relevantes de la investigación desarrollada.

BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA

El presupuesto participativo es un mecanismo o un proceso por el cual la población define o contribuye a definir el destino de una parte de los recursos públicos (Cabannes, 2004a). Se trata de una nueva forma de toma de decisiones que involucra activamente a la ciudadanía en la priorización del gasto público (Goldfrank, 2006). Es una práctica recomendada por instituciones como el Banco Mundial o las Naciones Unidas (Sintomer y Ganuza, 2011), reconocida por esta última como una de las «mejores prácticas» en planeamiento urbano (Schneider y Goldfrank, 2006), y que cuenta en la actualidad con más de 3.000 experiencias en todo el mundo (Cabannes, 2017).

En general, suelen constar de tres fases: la primera se dirige a presentar el proceso, rendir cuentas de las decisiones adoptadas en ediciones anteriores y a fijar las reglas internas participativamente; la segunda, a recoger, mediante la deliberación en asambleas públicas, las propuestas ciudadanas;

y la tercera, a priorizar dichas propuestas (Ganuza, 2010). Los ciudadanos que participan en este tipo de procesos incrementan el sentimiento de identidad grupal y de solidaridad, amplían su red social y contribuyen al fortalecimiento comunitario (Allegratti, García-Leiva y Paño, 2011; Gilman, 2016a; Wampler, 2007).

El impacto positivo del presupuesto participativo sobre la recaudación municipal es reconocido en diferentes estudios. La mayoría de estos trabajos se centran en regiones de Brasil (Biderman y Silva, 2007; Cabannes, 2004b; Schneider y Baquero, 2006; Spada, 2015; Touchton, Wampler y Peixoto, 2019), si bien determinados estudios comprueban este impacto en regiones africanas (Cabannes, 2015; Mbera y Allegratti, 2014) o rusas (Beuermann y Amelina, 2014). En estos casos, los autores concluyen que los municipios que implementan presupuestos participativos tienden a presentar un volumen de ingresos tributarios más elevado que los municipios donde no se utiliza dicho mecanismo. Sin embargo, en todos estos trabajos se realiza un análisis comparativo —regiones con/sin presupuesto participativo— y a nivel institucional —recaudación municipal—, por lo que no se profundiza a nivel individual y subjetivo.

¿Qué ofrecen o aportan este tipo de procesos a título individual para que la ciudadanía tenga una mayor propensión al pago de sus impuestos? Si bien en términos generales la participación ciudadana se asocia con el fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones públicas y la ciudadanía, políticas públicas de mayor calidad, el incremento de la confianza institucional y el distanciamiento de conductas incívicas (Gramberger, 2001; Pino y Colino, 2003; Velásquez y González, 2003), tres son los aspectos sobre los que focalizaremos la atención en referencia al presupuesto participativo: 1) la confianza que se genera en las instituciones fruto de la transparencia y la rendición de cuentas, 2) la eficiencia percibida ante la posibilidad

de participar directa y personalmente en la gestión pública decidiendo el destino de una parte de recursos públicos, y 3) los aprendizajes que se producen en las distintas fases de estos procesos. Todos ellos son reconocidos por la Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017) como principios inherentes a presupuestos participativos de calidad.

Respecto al primero, la transparencia y la rendición son utilizadas por la ciudadanía en este tipo de procesos para llevar a cabo un seguimiento y el control de cómo se gasta el dinero público (Harkins y Escobar, 2015). Contribuyen a mejorar la calidad de la gobernabilidad democrática y a reducir la corrupción, en particular cuando existen modalidades de control de la ejecución del presupuesto y de las obras por parte de la ciudadanía (Cabannes, 2004a; Wampler, 2007). Las rendiciones de cuentas suelen darse bajo cuatro modalidades: audiencias públicas anuales (o incluso más frecuentes) durante las cuales los responsables políticos y técnicos dan cuenta del proceso, a través de folletos, mediante la colocación de la información en los portales webs de los municipios (Cabannes, 2004a), o durante las distintas asambleas realizadas. Que la población tenga acceso a dicha información, y que las autoridades se tomen el trabajo de prepararla y exponerla, contribuye a incrementar la transparencia (Allegratti, García-Leiva y Paño, 2011; Sintomer, 2005), la legitimidad y la confianza en las instituciones.

Por otro lado, lo ideal para un ciudadano sería que el gasto público atendiera a sus demandas, pero, puesto que ello es improbable, es fundamental que este se sienta partícipe en la decisión de qué y cómo se financia (Castañeda, 2015). El presupuesto participativo mejora la eficiencia del gasto público (Cabannes, 2004a), dado que los individuos realizan sus propias propuestas a la Administración, deliberan y priorizan sobre el total de estas a través de una vo-

tación. Durante las diferentes fases los participantes deliberan con sus conciudadanos, lo que hace que pongan sobre la mesa sus distintos puntos de vista, proporcionándose una visión global y de conjunto de las problemáticas, lo que parece contribuir de forma específica a la solidaridad y a la justicia social (Cano, Mayor y Molina, 2020), dado que los ciudadanos tradicionalmente excluidos tienen la oportunidad y el derecho de participar en estos nuevos espacios de toma de decisiones (Gilman, 2016b; Wampler, 2007).

De este modo, los ciudadanos no solo participan aportando sus necesidades y su sentido común, sino que también adquieren conocimientos con los que previamente no contaban (Font, 2004). Fruto de la asistencia a asambleas y reuniones vecinales mediadas y dirigidas por dinamizadores comunitarios, los participantes reciben una serie de aprendizajes, los cuales transforman a los habitantes en «ciudadanía» al aprender cómo funcionan las instituciones, cómo es el lugar en el que viven, cuáles son las desigualdades que existen y, sobre todo, cómo se gestionan los recursos públicos (Allegratti, García-Leiva y Paño, 2011; Wampler, 2007). Existe evidencia de que los ciudadanos perciben altos niveles de transparencia no solo cuando tienen acceso a la información presupuestaria, sino también cuando la entienden y experimentan significados compartidos con otros participantes en este tipo de procesos presupuestarios (Brun-Martos y Lapsley, 2017). Por tanto, el presupuesto participativo no solo es un proceso de deliberación y toma de decisiones, sino también un espacio de educación informal que promueve importantes experiencias de aprendizaje sobre ciudadanía y democracia (Lerner y Schugurensky, 2007).

Estos tres aspectos —confianza institucional fruto de la transparencia y la rendición de cuentas, eficiencia ante la posibilidad de participación en la gestión pública y educación cívica— a su vez se relacionan en

la literatura con una mayor predisposición al pago de los impuestos (Arias, 2008; Barone y Mocetti, 2011; Martínez y Miquel, 2013; Newton, 2001), por lo que parece razonable pensar que la participación en este tipo de procesos puede generar (potencialmente) en los individuos una mayor conciencia fiscal.

METODOLOGÍA

Objetivos e hipótesis

El objetivo del presente trabajo es demostrar que participar activamente en un proceso de cierta calidad de presupuestos participativos da lugar a una mayor predisposición al pago voluntario de los impuestos, por lo que se plantea un modelo de ecuaciones estructurales. Además de contrastar dicha hipótesis de causalidad en potencia, se consideran las posibles relaciones que pueden existir entre variables tales como la confianza en las instituciones, las normas sociales y la pertenencia a asociaciones políticas dado que, según la literatura —tal y como se ha señalado en la primera parte del trabajo—, no parecen ser variables independientes entre sí. Por todo ello se consideran las siguientes hipótesis, teniendo presente en todo momento que cuando se habla de causalidad se hace alusión a una causalidad potencial, y no en sentido estricto:

- H₁: participar activamente en un proceso de presupuestos participativos de calidad da lugar a una mayor conciencia fiscal;
- H₂: una mayor confianza en las instituciones da lugar a una mayor conciencia fiscal;
- H₃: una mayor aceptación de las normas sociales da lugar a una mayor conciencia fiscal;
- H₄: pertenecer a una asociación política da lugar a una mayor conciencia fiscal;
- H₅: una mayor confianza en las instituciones da lugar a una mayor participación en los procesos de presupuestos participativos;

- H₆: una mayor confianza en las instituciones influye en la afiliación a una asociación política;
- H₇: pertenecer a una asociación política da lugar a participar en un proceso de presupuestos participativos.

Muestra

El ámbito local es el más indicado para el estudio de la participación de los individuos, dado que las oportunidades de una participación efectiva para el ciudadano son mayores a nivel local que en otros niveles (Almond y Verba, 1970). Asimismo, es el ámbito donde se desarrollan la gran mayoría de presupuestos participativos. Por ello, se consideró oportuno seleccionar un municipio español en el que se desarrollase un presupuesto participativo ambicioso y de cierta calidad, además de que contase con una trayectoria participativa. De este modo, se seleccionó el municipio de Molina de Segura (Región de Murcia). En el municipio, que cuenta con 72.000 habitantes aproximadamente, destaca especialmente el movimiento ciudadano, pionero en la Región de Murcia. Molina de Segura contaba, en el año 2017, con un presupuesto participativo de 4.000.000 de euros —lo que equivale al 6,89% de su presupuesto municipal—, proceso, a su vez, que cumple los 13 principios de calidad propuestos por la Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017). En dicho año, de los 53.260 ciudadanos que tenían derecho a participar, votaron 4.086, lo que equivale al 7,67%. Se trata de un proceso autorregulado, es decir, se realizan una serie de reuniones previas (entre 6-8) con el fin de que sea la propia ciudadanía la que elabore las reglas que se han de seguir durante todo el proyecto. Entre sesiones informativas y de priorización se suelen desarrollar en torno a 50-60 asambleas presenciales al año, siendo un proceso mayoritariamente presencial, donde incluso el día de la votación la mayor parte de los participantes, alrede-

dor del 65%, suele votar de modo presencial. Asimismo, en aras de una mayor transparencia, se realizan constantes sesiones de rendiciones de cuentas de los proyectos de ediciones anteriores tanto en centros sociales como en las Juntas Locales de Participación Ciudadana.

En términos generales, los individuos que suelen participar en los asuntos públicos son una pequeña parte de la población, por lo que no se aconseja el uso de bases de datos representativas y aleatorias que no consideren y corrijan este hecho con la introducción de cuotas a la hora de conformar la muestra. Trabajos previos sobre cumplimiento fiscal y participación —en este caso política— que utilizan encuestas de ámbito nacional procedentes de la European Values Study remarcan las inconsistencias que se pueden producir en los resultados al no considerarse dichas cuotas, imposibilitando una comparación rigurosa entre individuos con perfil participativo y no participativo (Sá, Martins y Gomes, 2014).

Dado que la muestra que se pretendía obtener resultaba de difícil acceso, se optó por realizar un muestro discrecional —o por juicio— y un muestreo por conveniencia. El cuestionario utilizado —elaborado por el Observatorio Fiscal de la Universidad de Murcia— fue pasado en dos modalidades durante el periodo 2016-2017: en formato físico, pasado a miembros de distintas asociaciones y a asistentes a las reuniones y asambleas del proceso de presupuestos participativos (muestreo discrecional); y en formato digital, publicándose en distintas redes sociales del municipio, en medios de comunicación y en la página web del proceso (muestreo por conveniencia). Finalmente, dicha muestra (tabla 1) se compuso de un total de 530 cuestionarios procedentes de individuos que residían en el municipio y que tenían 16 o más años de edad, de los cuales el 58,49% se recogieron en formato físico, y el resto, 41,51%, en formato digital.

TABLA 1. *Muestra y datos del municipio*

	Muestra		Municipio	
	N	Porcentaje	Población	Porcentaje
Edad				
Entre 16-30	66	12,45	12.620	23,70
Entre 31-45	183	34,53	19.043	35,76
Entre 46-60	181	34,15	12.495	23,46
Más de 61 años	100	18,87	9.101	17,09
Total	530	100,00	53.260	100,00
Sexo				
Hombre	224	42,26	26.574	49,89
Mujer	306	57,74	26.686	50,11
Total	530	100,00	53.260	100,00
Presupuesto participativo 2017				
Participantes	150	28,30	4.086	7,67
Total	530	100,00	53.260	100,00

Nota: Los individuos deben de tener al menos 16 años para poder participar, por lo que no se ha considerado la población de menor edad a la hora de conformar la muestra. Datos municipales de edad y sexo procedentes del INE (2017).

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2. *Descriptivos de las variables principales*

	Observaciones	Media	Mediana	Desviación estándar	Desviación absoluta mediana (MAD)
Conciencia fiscal					
Bien común	530	0,84	1,00	0,366	0,00
Fraude injustificado	530	0,79	1,00	0,404	0,00
Presupuesto participativo					
Presupuesto participativo	530	0,28	0,00	0,451	0,00
Confianza institucional					
Parlamento	530	3,93	4,00	2,580	2,00
Tribunales	530	4,72	5,00	2,765	2,00
Partidos políticos	530	2,71	2,00	2,087	1,00
Estado	530	3,95	4,00	2,570	2,00
CC. AA.	530	3,51	3,00	2,411	2,00
Ayuntamiento	530	3,86	4,00	2,473	2,00
Normas sociales					
Basura	530	9,82	10,00	0,754	0,00
Alcohol	530	9,70	10,00	0,893	0,00
Robar	530	9,78	10,00	0,821	0,00
Redes sociales					
Asociación política	530	0,11	0,00	0,315	0,00

Fuente: Elaboración propia.

Descripción de las variables

En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las variables principales que se han utilizado, teniéndose presentes la media —que en el caso de las variables ordinales dicotómicas «bien común, fraude injustificado, presupuesto participativo y asociación política» representa una proporción— y la mediana, como estadísticos de tendencia central, y la desviación estándar y la desviación absoluta mediana como estadísticos de dispersión.

Conciencia fiscal

Para medir el cumplimiento tributario se ha utilizado el concepto de conciencia fiscal. La pregunta del cuestionario utilizada para medirla ha sido la siguiente: «P12. En su opinión, ¿cuál de estas dos conductas sería más reprobable? 1) Alguien deja de ingresar 6.000 € a la Hacienda pública; 2) A usted le roban 100 €» (Alarcón, Quiñones y Sánchez, 2015). La primera de las posibles respuestas se relaciona con la moral pública en el sentido de que está orientada al servicio de la colectividad frente a la segunda opción, referida a la moral privada, en la que las normas son personales, y a veces opuestas a las generales. Por tanto, la conciencia fiscal se mueve en dos planos, uno individual relativo a las percepciones y cogniciones de los sujetos sobre su contribución al propio bienestar, y otro contextual, ambiental, referido a su contribución al bien común. En este caso se ha procedido a una recodificación de la variable para su análisis, de tal modo que a la variable denominada «bien común» se le otorga el valor 1 a los individuos que señalan la primera de las opciones como conducta más reprobable, y el valor 0 si señalan la segunda. Al tratarse de una variable ordinal dicotómica entre 0 y 1, la media representa la proporción, por lo que una media de 0,84 se interpreta como que el 84,2% de los encuestados considera que la primera de di-

chas conductas es más reprobable, frente al 15,8% restante que opina lo contrario.

Asimismo, se ha contado con la variable tradicionalmente utilizada para medir la moral tributaria, y que se ha denominado «fraude injustificado», la cual procede de la pregunta del cuestionario: «P15. En su opinión, el fraude fiscal está justificado porque (marque solo una opción): 1) Lo que se paga al Estado es excesivo; 2) Los que más tienen no pagan lo que les corresponde; 3) El control del fraude no es eficaz; 4) Hacerlo no perjudica a nadie; 5) El fraude fiscal no es justificable bajo ningún concepto». Dicha variable ha sido dicotomizada, tomando el valor 1 si los encuestados señalaron en la pregunta la respuesta 5, y 0 si seleccionaron cualquiera de las opciones restantes. En este sentido, el 20,6% de los encuestados justifica de algún modo el fraude fiscal, frente al 79,4% restante, que lo rechaza.

Presupuestos participativos

Con el objetivo de conocer si el encuestado había participado o no en el proceso de presupuestos participativos se preguntó lo siguiente: «P0. ¿Participó en el diseño del presupuesto de Molina en el año 2015, 2016 o en el presente 2017 personalmente y de una manera directa haciendo propuestas en el proceso de los presupuestos participativos?». Es importante remarcar la parte «personalmente y de una manera directa haciendo propuestas», ya que de este modo solo marcarán la opción «sí» aquellos que cumplan dichas características, dado que son los más implicados en el proceso, ya que han asistido a las reuniones previas, han participado en la elaboración del autorreglamento y/o han asistido a las distintas asambleas realizadas; por lo que se dejan al margen los individuos que únicamente han participado votando las propuestas el día señalado. De este modo, la variable «presupuesto participativo» tomará el valor 1 si los encuestados afirman haber participado en dicho proceso, o 0 en caso con-

trario. Su valor medio $-0,28-$ indica que el 28,3% de los encuestados participó en el proceso de presupuestos participativos personalmente y de una forma directa, frente al 71,7% que no lo hizo.

Confianza institucional

Para esta investigación se ha considerado la confianza institucional frente a otros tipos de confianza, al ser una variable presente en diversos estudios sobre moral tributaria (Azar, Gerstenblüth y Rossi, 2010; Giachi, 2014).

En esta ocasión se ha preguntado a los encuestados: «P19. Por favor, valore su nivel de confianza del 1 al 10 siendo 1 = ninguna y 10 = mucha, en las siguientes instituciones: 1) El Parlamento; 2) Los tribunales/justicia; 3) Los partidos políticos; 4) El Estado; 5) La Comunidad Autónoma (CC. AA.); 6) El Ayuntamiento». De este modo, cada una de dichas variables oscilará entre el valor 1 —no confiar en absoluto en la institución de referencia— y el valor 10, que equivale a mostrar una elevada confianza en dicha institución.

TABLA 3. *Comparativa de medias*

	Participación activa en el presupuesto participativo		Pertenencia a alguna asociación política	
	Sí (N=150)	No (N=380)	Sí (N=59)	No (N=471)
Conciencia fiscal				
Bien común	0,93	0,81	0,97	0,83
Fraude injustificado	0,87	0,77	0,83	0,79
Presupuesto participativo				
Presupuesto participativo	1,00	0,00	0,49	0,26
Confianza institucional				
Parlamento	4,43	3,74	5,07	3,79
Tribunales	5,00	4,62	5,02	4,69
Partidos políticos	3,04	2,58	4,22	2,52
Estado	4,33	3,81	4,53	3,88
CC. AA.	3,91	3,36	4,05	3,45
Ayuntamiento	4,25	3,71	5,14	3,70
Normas sociales				
Basura	9,79	9,84	9,73	9,83
Alcohol	9,73	9,70	9,66	9,71
Robar	9,83	9,77	9,66	9,80
Redes sociales				
Asociación política	0,19	0,08	1,00	0,00

Fuente: Elaboración propia.

Normas sociales

Las normas sociales, si bien no han sido tan utilizadas en la literatura como la confianza institucional, son consideradas en diversos estudios (Azar, Gerstenblüth y Rossi,

2010). Para comprobar su efecto se ha utilizado el siguiente ítem: «P14. Por favor indique, para cada una de las siguientes afirmaciones, si considera siempre justificado, nada justificado en una escala del 1 al 10,

donde 1 = nunca y 10 = siempre: 1) Tirar basura en un espacio público; 2) Conducir bajo la influencia del alcohol; 3) Robar algún artículo de complementos». Dado que los valores oscilan entre 1 y 10, siendo 1 nada justificado y 10 siempre justificado y las afirmaciones suponen una no aceptación de las normas sociales, se ha procedido a realizar una recodificación inversa de las variables. De este modo se presentan las variables en una escala de 1 a 10 donde el valor 1 corresponde a la no aceptación de la norma social y el valor 10 a la aceptación de dicha norma.

Redes sociales

La variable «asociación política» fue utilizada para recoger si los individuos pertenecían o no a este tipo de asociaciones. Dicha variable tomará el valor 1 si el individuo pertenece a una asociación política y 0 en caso contrario. En este sentido, el 11,1% de los encuestados afirmó pertenecer a una asociación política, frente al 88,9% restante.

Una vez analizadas las variables principales se ha considerado conveniente segmentar cada una de ellas atendiendo a dos criterios: si los individuos han participado o no activamente en el presupuesto participativo, y si los encuestados pertenecen o no a algún tipo de asociación política (tabla 3).

Modelo

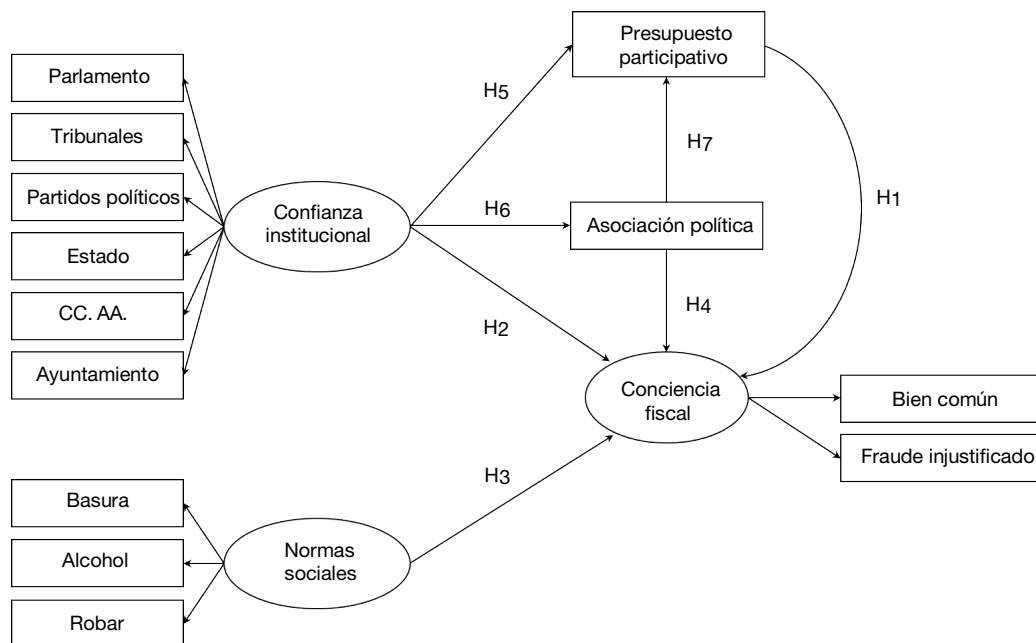
Si bien a lo largo de la literatura sobre el cumplimiento tributario abundan los análisis de regresión múltiple, los modelos de ecuaciones estructurales permiten examinar simultáneamente una serie de relaciones de dependencia, proporcionando, de este modo, al investigador la capacidad de acomodar relaciones de dependencia cruzadas múltiples en un único modelo.

En la figura 1 se presenta el modelo conceptual o diagrama de secuencias propuesto para dicho análisis confirmatorio junto con

las hipótesis a contrastar. En este se encuentran tres variables latentes: la conciencia fiscal, la confianza institucional y las normas sociales. Una variable latente es un concepto supuesto y no observado que solo puede ser aproximado mediante variables medibles u observables. Las variables observadas, que en este caso se han recogido a través del cuestionario anteriormente comentado, se conocen como variables manifiestas. Entonces, ¿por qué se querría utilizar una variable latente no medida en lugar de datos exactos —variables manifiestas— que ofrecen los encuestados? Aunque esto pueda parecer que no tiene sentido, tiene justificaciones tanto prácticas como teóricas, al mejorar la estimación estadística, mejorar la representación de conceptos teóricos y tener en cuenta el error de medida (Hair *et al.*, 1999). La variable latente «conciencia fiscal» ha sido construida a través de dos variables observables, definidas previamente: la percepción del «bien común» y la injustificación del fraude fiscal —«fraude injustificado»—; para la variable latente «confianza institucional» se han utilizado las variables observadas que hacían alusión a la confianza en el «Parlamento», los «tribunales», los «partidos políticos», el «Estado», la «CC. AA.» y el «Ayuntamiento»; y por último, para la variable latente «normas sociales», se han utilizado las variables «basura», «alcohol» y «robar». Asimismo, se incluyen en el modelo dos variables observadas: la participación activa en el proceso de «presupuestos participativos» y la afiliación o no a una «asociación política».

Sin embargo, previo a la realización del análisis estructural y la confirmación de que el modelo conceptual propuesto es el adecuado y se cumplen las hipótesis planteadas, es preciso realizar una serie de pruebas y tener presente ciertos criterios en lo que respecta al modelo de medida. En este sentido, se realizan las pruebas relativas a la validez del mismo, considerando tanto la validez convergente como la validez divergente o discriminante.

FIGURA 1. Modelo conceptual



Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en lo que respecta al modelo de medida, tanto de las pruebas de validez convergente como de las pruebas de validez divergente o discriminante tras realizar un análisis confirmatorio de factores. Este procedimiento y la confirmación del modelo estructural se ha desarrollado con el software IBM® SPSS® Amos 24.0.0. Para comprobar la validez convergente se utilizaron los tres criterios planteados por Hair *et al.* (1999): la confiabilidad de los ítems de cada constructo (carga factorial), la varianza promedio extraída (VPE) y la confiabilidad del constructo, usándose los índices de ajuste sugeridos por Fornell y Larcker (1981), Hair *et al.* (1999), Hjorth (1994) y Nunnally (1978) para evaluar la adecuación del modelo

—carga factorial > 0,7, VPE > 0,5 y confiabilidad del constructo > 0,7— (tabla 4).

Posteriormente se realizaron las pruebas desarrolladas por Anderson y Gerbing (1988) y Fornell y Larcker (1981), con el fin de comprobar la validez divergente o discriminante del modelo propuesto (tablas 5 y 6).

Ratificadas la fiabilidad, la validez convergente y la validez divergente o discriminante queda demostrado: 1) que todos los ítems observados deben formar parte de las variables latentes, por lo que no se desecha ninguno de estos; y 2) que dichas variables latentes son diferentes entre sí. Por tanto, a raíz de los resultados, se considera apropiado realizar el modelo de ecuaciones estructurales utilizando un método de covarianza de máxima verosimilitud, mostrándose los resultados de dicho modelo a continuación.

TABLA 4. Validez convergente

	Est. L_i	(1) Carga Factorial	(2) VPE		(3) Confiabilidad del constructo				
			L_i^2	Indicador	ΣL_i	$(\Sigma L_i)^2$	e_i estimación	Σe_i	Indicador
Conciencia fiscal				0,644	1,592	2,534		0,712	0,781
Bien común	0,693	$\approx 0,7$	0,480				0,520		
Fraude injustificado	0,899	$> 0,7$	0,808				0,192		
Confianza institucional				0,620	4,708	22,165		2,279	0,907
Parlamento	0,778	$> 0,7$	0,605				0,395		
Tribunales	0,713	$> 0,7$	0,508				0,492		
Partidos políticos	0,720	$> 0,7$	0,518				0,482		
Estado	0,878	$> 0,7$	0,771				0,229		
CC. AA.	0,872	$> 0,7$	0,760				0,240		
Ayuntamiento	0,747	$> 0,7$	0,558				0,442		
Normas sociales				0,623	2,359	5,565		1,130	0,831
Basura	0,845	$> 0,7$	0,714				0,286		
Alcohol	0,688	$\approx 0,7$	0,473				0,527		
Robar	0,826	$> 0,7$	0,682				0,318		

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 5. Criterio de correlación entre constructos de Anderson y Gerbing (1988)

	χ^2	GL	$\Delta\chi^2$	ΔGL	p
Modelo inicial	226,919	41	—	—	—
Conciencia fiscal y Confianza institucional = 1	475,997	42	249,078	1	$< 0,00001$
Conciencia fiscal y Normas sociales = 1	483,762	42	256,843	1	$< 0,00001$
Confianza institucional y Normas sociales = 1	833,902	42	606,983	1	$< 0,00001$

Notas: GL = Grados de libertad; $\Delta\chi^2$ = Diferencia entre la χ^2 del modelo contrastado y la χ^2 del modelo inicial; ΔGL = Diferencia entre los grados de libertad del modelo contrastado y los grados de libertad del modelo inicial.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 6. Criterio de Fornell y Larcker (1981)

	Correlación entre constructos		Min. VPE entre constructos
	Estimación	Estimación ²	
Conciencia fiscal y Confianza institucional	0,205	0,042	0,620
Conciencia fiscal y Normas sociales	0,109	0,012	0,623
Confianza institucional y Normas sociales	0,027	0,001	0,620

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 7 se encuentran tanto los coeficientes de la estimación —estandarizados y no estandarizados—, como el error

típico o estándar, la «prueba t» o ratio crítico y el «p valor» correspondiente de cada estimador.

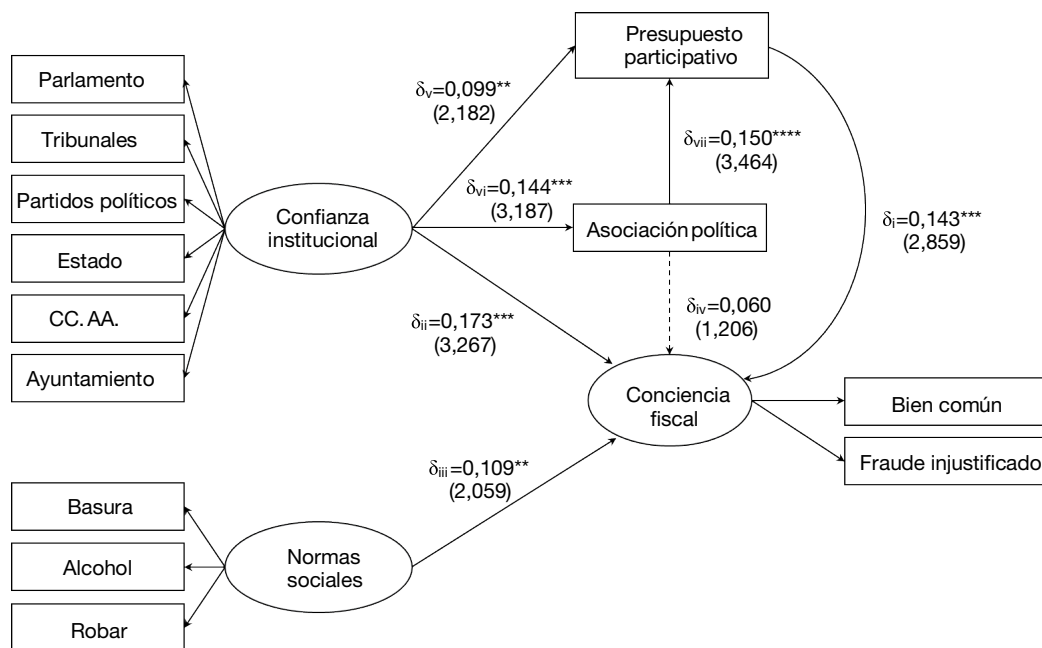
TABLA 7. Coeficientes del modelo final

	B_j	b_j	ET	t	p
Presupuestos P. → Conciencia fiscal	0,143	0,094	0,033	2,859	0,004
Conf. institucional → Conciencia fiscal	0,173	0,026	0,008	3,267	0,001
Normas sociales → Conciencia fiscal	0,109	0,048	0,023	2,059	0,040
Asociación política → Conciencia fiscal	0,060	0,056	0,047	1,206	0,228
Conf. institucional → Presupuestos P.	0,099	0,022	0,010	2,182	0,029
Conf. institucional → Asociación política	0,144	0,023	0,007	3,187	0,001
Asociación política → Presupuestos P.	0,150	0,214	0,062	3,464	0,000

Nota: B_j = Coeficientes estandarizados de cada constructo; b_j = Coeficientes no estandarizados de cada constructo; ET = Error típico o estándar; t = Critical ratio = b_j/ET = prueba estadística de la significación de cada constructo.

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2. Resultados del modelo conceptual propuesto



Nota: Significancia de los coeficientes indicada por: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$; **** $p < 0,001$.

Fuente: Elaboración propia.

El «p valor» de la tabla anterior indica el nivel de significación estadística de los estimadores, incluyéndose, asimismo, dichos resultados en la figura 2. En esta, las flechas continuas denotan las hipótesis que se cumplen y las flechas discontinuas las hipótesis que no se cumplen, incluyéndose entre paréntesis los resultados de la «prueba t». En este caso se puede observar cómo seis de los siete estimadores son significativos.

Por tanto, queda demostrado, a partir de los datos disponibles, cómo participar activamente en procesos de presupuestos participativos influye potencialmente de una manera directa y positiva sobre la conciencia fiscal de los individuos (H_1 , $p < 0,01$). Este tipo de procesos, tal y como se planteó al inicio del trabajo, generan en los individuos confianza en las instituciones fruto de la transparencia y de la rendición de cuentas que se producen en las distintas fases de los mismos. En este sentido, estudios recientes muestran cómo presupuestos participativos sin transparencia son totalmente contraproducentes, dado que disminuyen la probabilidad de cumplimiento tributario (Park, 2020). Asimismo, el hecho de que los individuos que participan sean conscientes de que los recursos municipales se emplean de una manera eficiente puede dar lugar a una mayor predisposición a pagar sus impuestos (Barone y Mocetti, 2011; Martínez y Sanz, 1999); mientras que un mayor grado de comprensión y conocimiento hacia el funcionamiento de los ingresos y los gastos públicos deriva también en una mayor disposición hacia el pago de estos (Martínez y Miquel, 2013).

Respecto a las variables secundarias, tanto la confianza en las instituciones como el seguimiento de las normas sociales influyen potencialmente de una manera directa y positiva sobre la conciencia fiscal (H_2 , $p < 0,01$; H_3 , $p < 0,05$). La percepción de la confianza en las instituciones y la satisfacción con el funcionamiento de las mismas

sirve como heurístico para valorar la política fiscal. Cuando existe confianza en las instituciones, las conductas de los contribuyentes estarán inclinadas hacia el cumplimiento tributario, revirtiendo en una mayor predisposición al pago de los impuestos (Arias, 2008; Bedoya y Vásquez, 2010). La aceptación e interiorización de las normas sociales, por otro lado, influye en la motivación a la hora de pagar los impuestos, encontrándose este resultado en la línea de otros trabajos, como el propuesto por Dulleck *et al.* (2016). Por el contrario, la hipótesis que hace alusión a la influencia de pertenecer a una asociación política sobre la conciencia fiscal (H_4) no ha sido contrastada de un modo satisfactorio, si bien tiene un efecto indirecto sobre la conciencia fiscal a través de la variable «presupuesto participativo».

En lo que se refiere a las relaciones de las variables secundarias entre sí, se confirma que tanto la confianza en las instituciones como la pertenencia a una asociación política influye en que los individuos participen activamente en el proceso de presupuestos participativos (H_5 , $p < 0,05$ y H_7 , $p < 0,001$ respectivamente). El hecho de que el proceso sea vinculante implica obligatoriedad por parte de la institución —en este caso el Ayuntamiento— de aceptar los resultados votados por la ciudadanía y su compromiso de ejecutar todas y cada una de las inversiones y programas priorizados por esta, lo que refuerza la confianza en la propia institución. En ningún caso se entendería un proceso en el cual se le exigiese a la ciudadanía que dedicase un bien tan preciado como es su tiempo, si posteriormente los acuerdos y los resultados alcanzados no tuviesen ningún efecto. En cuanto al resultado referente a la asociación política, este se encuentra en la línea del trabajo de Verba, Schlozman y Brady (1995), al observarse que aquellos individuos que muestran una preocupación por la política están más dispuestos a la participación. Por último, la confianza en las instituciones influye en

la afiliación a asociaciones políticas (H_6 , $p < 0,01$) pues, tal y como se afirma en la literatura, las personas que confían tienden más a asociarse (Newton, 2001; Zmerli, Newton y Montero, 2007).

Por otro lado, y en lo que respecta a los índices de ajuste del modelo resultante, el modelo arroja una χ^2 es 308,532 con 59 grados de libertad. Sin embargo, en la práctica, el valor de χ^2 es muy sensible al tamaño de la muestra, por lo que se recomienda como mejor medida de bondad de ajuste la relación de χ^2 sobre los grados de libertad (Hair *et al.*, 1999). El nivel común de dicha relación se establece en ser inferior a 5. En el modelo propuesto dicho valor es 5,229 que, si bien sobrepasa el criterio, se encuentra cercano a este. En cuanto al resto de indicadores de bondad de ajuste, tanto el valor de GFI —0,920—, como de CFI —0,920—, TLI —0,894— y NFI —0,903— cumplen con el criterio de ser mayores de 0,900, a excepción de TLI, si bien está muy próximo al valor recomendado. Por último, y en lo que respecta al RMSEA, un valor óptimo sería 0,050 o menor, si bien los valores que oscilan entre 0,050 y 0,080 se consideran aceptables (Hair *et al.*, 1999). En este caso, el valor obtenido es 0,089, por lo que, si bien es un valor cercano al máximo recomendado, supera a este. Por tanto, comparando los valores obtenidos con los valores críticos correspondientes se puede concluir que estos sugieren que el modelo hipotético se ajusta adecuadamente a los datos empíricos.

Sin embargo, estos resultados, como sucede en la mayoría de los trabajos realizados en el ámbito de las ciencias sociales, han de tomarse con cautela, dado que el estudio realizado ha contado con una serie de limitaciones. En primer lugar, el método utilizado para la recolección de la muestra no permite hacer una generalización de los resultados. Asimismo, el hecho de utilizar encuestas y, además, tratar temas tributarios puede dar lugar al fenómeno denominado deseabilidad

social y a que las respuestas de los individuos encuestados no sean totalmente honestas. Por otra parte, y en cuanto a la medición de los constructos se refiere, ha de recordarse que se están midiendo variables no observables a través de estos, como son la conciencia fiscal, la confianza en las instituciones y las normas sociales. Si bien se ha realizado un esfuerzo para conseguir un conjunto de indicadores válidos y fiables —y según el modelo de medida de las ecuaciones estructurales así ha sido—, estos no dejan de ser una aproximación. En cuarto lugar, la variable que hace alusión a la conciencia fiscal en el modelo estructural presentado ha sido medida a partir de dos indicadores —el bien común y la no justificación del fraude fiscal—, si bien lo recomendable es utilizar al menos tres indicadores. No obstante, a día de hoy no existe una escala que permita medir la conciencia fiscal de un modo apropiado. Por último, la variable presupuestos participativos no mide intensidades. Se trató de compensar este hecho incluyendo en la pregunta del cuestionario «participación personal y de una manera directa haciendo propuestas», aunque lo cierto es que considera como iguales a individuos participativos y a individuos muy participativos. Lo mismo sucede al considerar la pertenencia o no a asociaciones políticas, dado que no se está considerando el papel que juegan los individuos dentro de las mismas.

CONCLUSIONES

El impacto de los presupuestos participativos en la propensión y la voluntad de los ciudadanos a pagar sus impuestos no es un campo explorado. Si bien una serie de trabajos previos relacionan la implementación de estos procesos con un incremento de la recaudación fiscal municipal, el presente trabajo pretende ir un paso más allá al focalizar la atención en la conciencia fiscal y la participación efectiva individual. A partir de una muestra

formada por 530 cuestionarios recogidos en un municipio con cierta trayectoria participativa, y tras la realización de un modelo de ecuaciones estructurales, se ha llegado a la conclusión de que participar activamente en el presupuesto participativo influye potencialmente, de una manera directa y positiva, sobre la conciencia fiscal de los individuos.

Por tanto, ¿sería suficiente la implementación de este mecanismo en el ámbito local para incrementar la conciencia fiscal de los individuos que habitan en el municipio? La respuesta es no, pues la existencia *per se* de estos procesos sería una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, los efectos de este instrumento participativo —tales como el incremento de la confianza institucional fruto de la transparencia y la rendición de cuentas, la percepción de eficiencia ante la posibilidad de decidir en la gestión de los recursos públicos, y los aprendizajes sobre el funcionamiento y el comportamiento de las instituciones— únicamente tienen efecto sobre la conciencia fiscal de los individuos que hacen uso del mismo.

A raíz de dicho resultado, los responsables políticos podrían, en principio, incrementar la conciencia fiscal —lo que lleva consigo un incremento de la recaudación tributaria— no solo poniendo a disposición de la ciudadanía dicho mecanismo participativo, sino fomentando e incentivando su uso de forma extensiva. Asimismo, podría ser una buena política pública, tal y como sucede en cada vez más municipios, su implementación en los centros educativos, puesto que la tesis generacional sostiene que la participación experimentada por los jóvenes durante sus años de formación tiene un impacto duradero y persistente que se manifiesta en los procesos políticos, de ahí la importancia de fomentar la participación en edades tempranas (Hooghe, 2003; Jennings, 1987).

Los resultados hallados, por tanto, ponen de relieve la importancia de incorporar a ciudadanía de una manera activa en la esfera de lo público, lo que demuestra que existen

instrumentos alternativos a las auditorías y a las sanciones para influir en el cumplimiento tributario. En próximas investigaciones, no obstante, sería conveniente —además de considerar las limitaciones mencionadas—, replicar el análisis en otros municipios y regiones con presupuestos participativos diferentes y similares en lo que respecta a tipos de participación, cuantías, intensidad, etc.; enriquecer y complementar el trabajo con un análisis cualitativo, con entrevistas en profundidad y grupos focales; y profundizar en el hecho de si la propensión a pagar los impuestos hace alusión exclusivamente a los tributos locales o a su conjunto en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón, Gloria; Beyaert, Arielle y Pablos, Laura de (2012). «Fiscal Awareness: A Study of Female versus Male Attitudes towards Tax Fraud in Spain». En: Pickhardt, M. y Prinz, A. (eds.). *Tax Evasion and the Shadow Economy*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Alarcón, Gloria y Ayala, Edgardo A. (2013). «Trust in Spanish Governments: Antecedents and Consequences». *Economic Analysis and Policy*, 43(2): 177-193. doi: 10.1016/S0313-5926(13)50017-8
- Alarcón, Gloria; Quiñones, Elena y Sánchez, Julio (2015). «How Can Have an Influence to Be a Housewife on Women's Fiscal Awareness? The Case of Spain». *Anales de Psicología*, 31(3): 952-961. doi: 10.6018/analesps.31.3.194961
- Allegretti, Giovanni; García-Leiva, Patricia y Paño, Pablo (2011). *Viajando por los presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos y aprendizajes*. Málaga: Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).
- Alm, James y Gómez, Juan L. (2008). «Social Capital and Tax Morale in Spain». *Economic Analysis and Policy*, 38(1): 73-87. doi: 10.1016/S0313-5926(08)50007-5
- Almond, Gabriel A. y Verba, Sidney (1970). *La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*. Madrid: Fundación Foessa.
- Anderson, James C. y Gerbing, David W. (1988). «Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach».

- ach». *Psychological Bulletin*, 103(3): 411-423. doi: 10.1037/0033-2909.103.3.411
- Arias, Roberto J. (2008). «Comentarios sobre "Determinantes de la Moral Tributaria en la Provincia de Buenos Aires", de Germán Antequera y Marcelo Florensa». *Serie Anales de La Asociación de Economía Política*, noviembre, pp. 16-20.
- Azar, Karina; Gerstenblüth, Mariana y Rossi, Máximo (2010). «Moral fiscal en el Cono Sur». *Desarrollo y Sociedad*, 65: 43-69. doi: 10.13043/dys.65.2
- Barone, Guglielmo y Mocetti, Sauro (2011). «Tax Morale and Public Spending Inefficiency». *International Tax and Public Finance*, 18(6): 724-749. doi: 10.1007/s10797-011-9174-z
- Bedoya, Andrea y Vásconez, Byron (2010). «Entendiendo la moral tributaria en Ecuador». *Fiscalidad. Revista Institucional del Servicio de Rentas Internas*, 5: 91-132.
- Beuermann, Diether W. y Amelina, Maria (2014). *Does Participatory Budgeting Improve Decentralized Public Service Delivery?* Inter-American Development Bank. (Working Paper Series No. IDB-WP-547).
- Biderman, Ciro y Silva, Glauco P. da (2007). *Estimating the Impact of Participatory Budget on Observed Outcomes*. Comunicación presentada en el XXXV Encontro Nacional de Economia, Brasil.
- Brun-Martos, María I. y Lapsley, Irvine (2017). «Democracy, Governmentality and Transparency: Participatory Budgeting in Action». *Public Management Review*, 19(7): 1006-1021. doi: 10.1080/14719037.2016.1243814
- Cabannes, Yves (2004a). *¿Qué es y cómo se hace el presupuesto participativo? 72 respuestas a preguntas frecuentes sobre presupuestos participativos municipales*. Quito: UN-Hábitat.
- Cabannes, Yves (2004b). *Presupuestos participativos: marco conceptual y análisis de su contribución a la gobernanza urbana y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Quito: ONU-Hábitat.
- Cabannes, Yves (2015). «The Impact of Participatory Budgeting on Basic Services: Municipal Practices and Evidence from the Field». *Environment and Urbanization*, 27(1): 257-284. doi: 10.1177/0956247815572297
- Cabannes, Yves (2017). «The Role of Participatory Budgeting and its Specific Contribution to Building "Another Possible City"». En: Cabannes, Y. (ed.). *Another City is Possible with Participatory Budgeting*. Montreal/New York/London: Black Rose Books.
- Cano, José A.; Mayor, José M. y Molina, José (2020). «Desde el realismo político a la participación ciudadana: el presupuesto participativo de Molina de Segura». En: Cabannes, Y.; Mayor, J. M. y Molina, J. (coords.). *Presupuestos participativos: aportes y límites para radicalizar la democracia*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Castañeda, Víctor M. (2015). «La moral tributaria en América Latina y la corrupción como uno de sus determinantes». *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(224): 103-132. doi: 10.1016/S0185-1918(15)30005-2
- Delgado, María L. (2009). *¿Por qué una educación fiscal? En La experiencia educativa de la administración tributaria española* (pp. 11-18). Documentos Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (Doc. N.º 13/09).
- Deth, Jan W. van y Eloff, Martin (2004). «Politicisation, Economic Development and Political Interest in Europe». *European Journal of Political Research*, 43(3): 477-508. doi: 10.1111/j.1475-6765.2004.00162.x
- Dulleck, Uwe; Fooker, Jonas; Newton, Cameron; Ristl, Andrea; Schaffner, Markus y Torgler, Benno (2016). «Tax Compliance and Psychic Costs: Behavioral Experimental Evidence Using a Physiological Marker». *Journal of Public Economics*, 134: 9-18. doi: 10.1016/j.jpubeco.2015.12.007
- Feld, Lars P. y Frey, Bruno S. (2002). «Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated». *Economics of Governance*, 3(2): 87-99. doi: 10.1007/s101010100032
- Font, Joan (2004). «Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y metodologías». En: Ziccardi, A. (ed.). *Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local*. México D.F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/Instituto Nacional de Desarrollo Social/Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
- Fornell, Claes y Larcker, David F. (1981). «Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error». *Journal of Marketing Research*, XVIII: 39-50. doi: 10.1177/002224378101800104
- Frey, Bruno S. y Torgler, Benno (2007). «Tax Morale and Conditional Cooperation». *Journal of Comparative Economics*, 35: 136-159. doi: 10.1016/j.jce.2006.10.006
- Ganuzza, Ernesto (2010). «Novos Instrumentos de Participação: entre a participação e a deliberação». En: Moreira, E. y Schettini, E. (eds.). *Experiências internacionais de participação*. São Paulo: UFMG.

- Giachi, Sandro (2014). «Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España contemporánea»/«Social Dimensions of Tax Evasion: Trust and Tax Morale in Contemporary Spain». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 145: 73-98. doi: 10.5477/cis/reis.145.73
- Gilman, Hollie R. (2016a). *Democracy Reinvented Participatory Budgeting and Civic Innovation in America*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Gilman, Hollie R. (2016b). *Engaging Citizens: Participatory Budgeting and the Inclusive Governance Movement within the United States*. Cambridge, Massachusetts: Ash Center Occasional Papers Series, Harvard University.
- Goldfrank, Benjamin (2006). «Los procesos de presupuesto participativo en América Latina: éxito, fracaso y cambio». *Revista de Ciencia Política*, 26(2): 3-28. doi: 10.4067/S0718-090X2006000200001
- Gramberger, Marc (2001). *Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making*. Paris: OECD.
- Hair, Joseph F.; Anderson, Rolph E.; Tatham, Roland L. y Black, William C. (1999). *Análisis multivariante*. Madrid: Prentice Hall. (5.ª ed.).
- Harkins, Chris y Escobar, Oliver (2015). *Participatory Budgeting in Scotland: An Overview of Strategic Design Choices and Principles for Effective Delivery*. Glasgow: Glasgow Centre for Population Health and What Works Scotland.
- Hjorth, Urban J. S. (1994). *Computer Intensive Statistical Methods: Validation Model Selection and Bootstrap*. London: Chapman & Hall.
- Hooghe, Marc (2003). «Participation in Voluntary Associations and Value Indicators: The Effect of Current and Previous Participation Experiences». *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 32(1): 47-69. doi: 10.1177/0899764003251198
- INE (2017). *Padrón continuo, datos por municipios*. Disponible en: <http://www.ine.es/>, acceso el 20 de junio de 2017.
- Jennings, M. Kent (1987). «Residues of a Movement: The Aging of the American Protest Generation». *The American Political Science Review*, 81(2): 367-382. doi: 10.2307/1961957
- Lerner, Josh y Schugurensky, Daniel (2007). «La dimensión educativa de la democracia local: el caso del presupuesto participativo». *Revista Temas y Debates*, 13: 157-159.
- Martínez, Marcelino y Sanz, José F. (1999). *La percepción del gasto público en el cumplimiento fiscal: contrastación empírica de la Hipótesis de Falkinger*. Instituto de Estudios Fiscales. (Papeles de Trabajo No.02/99).
- Martínez, José A. y Miquel, Ana B. (2013). «Instrumentos clave en la lucha contra el fraude: la importancia de la educación fiscal». *Crónica Tributaria*, 146: 179-192.
- Mbera, Emmy y Allegretti, Giovanni (2014). «Participatory Budgeting and the Budget Process in the South Kivu Province». En: Dias, N. (ed.). *Hope for Democracy. 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide*. São Brás de Alportel: In Loco Association.
- Morales, Laura (2001). «Participación política y pertenencia a grupos políticos: los límites de las explicaciones individuales y la necesidad de considerar el contexto político». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 94: 153-184. doi: 10.2307/40184316
- Newton, Kenneth (2001). «Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy». *International Political Science Review*, 22(2): 201-214. doi: 10.1177/0192512101222004
- Nunnally, Jum C. (1978). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill. (2.ª ed.).
- Park, Yaerin (2020). *Participatory Budgeting and Willingness to Pay Taxes: Evidence from an Exploratory Sequential Mixed Methods Study*. Cordes, Joseph J. (dir.), Washington: George Washington University. [Tesis doctoral].
- Pino, Eloisa del y Colino, César (2003). *Las nuevas formas de participación en los gobiernos locales*. Madrid: Fundación Alternativas.
- Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017). *Charter of Quality for Participatory Budgeting in Portugal*. Portugal: Portugal Participa.
- Prieto, Juan; Sanzo, María J. y Suárez, Javier (2006). «Análisis económico de la actitud hacia el fraude fiscal en España». *Hacienda Pública Española*, 177: 107-128.
- Putnam, Robert D. (1995). «Bowling Alone: America's Declining Social Capital». *Journal of Democracy*, 6(1): 65-78. doi: 10.1353/jod.1995.0002
- Putnam, Robert D. (2002). *Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Sá, Cristina; Martins, António y Gomes, Carlos (2014). «The Influence of Demographic Factors and Risk Aversion on Tax Morale: A Multi-Group Analysis». *European Journal of Research on Education*, 2(2): 82-93. doi: 10.15527/ejre.201426251
- Schelling, Thomas C. (1989). *Micromotivos y macroconducta*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Schneider, Aaron y Baquero, Marcelo (2006). *Get What You Want, Give What You Can: Embedded Public Finance in Porto Alegre*. Working Paper Centre for the Future State and the Institute of Development Studies. (IDS Working Paper 266).
- Schneider, Aaron y Goldfrank, Benjamin (2006). «Construcción institucional competitiva: el PT y el Presupuesto Participativo de Rio Grande do Sul». En: Lubambo, C.; Coêlho, D. y Melo, M. (eds.). *Diseño institucional y participación política: experiencias en el Brasil contemporáneo*. Buenos Aires: CLACSO.
- Sintomer, Yves (2005). «Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos». *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 31: 1-17.
- Sintomer, Yves y Ganuza, Ernesto (2011). *Democracia participativa y modernización de los servicios públicos: Investigación sobre las experiencias de presupuesto participativo en Europa*. Paris: Transnational Institute.
- Spada, Paolo (2015). *The Political and Economic Effects of Brazilian Participatory Budgeting*. (Working Paper).
- Subirats, Joan (2001). «Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas y amenazas». En: Font, J. (ed.). *Ciudadanos y decisiones públicas*. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- Torgler, Benno (2005). «Tax Morale and Direct Democracy». *European Journal of Political Economy*, 21(2): 525-531. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002
- Torgler, Benno; Schneider, Friedrich y Schaltegger, Christoph A. (2010). «Local Autonomy, Tax Morale, and the Shadow Economy». *Public Choice*, 144(1): 293-321. doi: 10.1007/s11127-009-9520-1
- Torgler, Benno; Demir, Ihsan C.; Macintyre, Alison y Schaffner, Markus (2008). «Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation». *Economic Analysis and Policy*, 38(2): 313-339. doi: 10.1016/S0313-5926(08)50023-3
- Touchton, Michael; Wampler, Brian y Peixoto, Tiago (2019). *Of Governance and Revenue Participatory Institutions and Tax Compliance in Brazil*. (World Bank Policy Research Working Paper 8797). doi: 10.1596/1813-9450-8797
- Velásquez, Fabio y González, Esperanza (2003). *¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?* Bogotá: Fundación Corona.
- Verba, Sidney; Scholzman, Kay L. y Brady, Henry (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wampler, Brian (2007). «A Guide to Participatory Budgeting». En: Shah, A. (ed.). *Handbook on Participatory Governance*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Zmerli, Sonja; Newton, Kenneth y Montero, José R. (2007). «Trust in People, Confidence in Political Institutions, and Satisfaction with Democracy». En: Deth, J. W. van; Montero, J. R. y Westholm, A. (eds.). *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis*. New York: Routledge.

RECEPCIÓN: 20/04/2020

REVISIÓN: 12/09/2020

APROBACIÓN: 08/01/2021

Fiscal Awareness and Participatory Budgeting: An Exploratory Study

*Conciencia fiscal y presupuestos participativos:
un estudio exploratorio*

**Gloria Alarcón García, José Manuel Mayor Balsas
and Claudia María Quintanilla Domínguez**

Key words

Citizenship
• Fiscal Awareness
• Structural Equation
Modelling
• Public Policies
• Participatory
Budgeting

Palabras clave

Ciudadanía
• Conciencia fiscal
• Modelo de
ecuaciones
estructurales
• Políticas públicas
• Presupuesto
participativo

Abstract

There is a paucity of research that has linked participatory budgeting to tax revenues, and no studies that have attempted to find a potential causal relationship between participating in this type of process and increasing individuals' tax compliance. This paper therefore seeks to make a small contribution to the field by providing empirical evidence on this topic. Based on 530 questionnaires from a municipality with a track record in participatory processes, a system of structural equations was used to show how active engagement in a participatory budgeting process could lead to greater fiscal awareness.

Resumen

Los trabajos que asocian presupuestos participativos e ingresos fiscales son escasos siendo, además, inexistentes los que tratan de encontrar una relación de causalidad potencial entre participar en este tipo de procesos e incrementar el cumplimiento tributario de los individuos. Por ello, con el presente trabajo se pretende dar un pequeño paso hacia adelante aportando evidencia empírica a este respecto. Partiendo de 530 cuestionarios de un municipio que cuenta con una determinada trayectoria participativa, y mediante un sistema de ecuaciones estructurales, se demuestra cómo el hecho de participar activamente en un proceso de presupuestos participativos podría dar lugar a una mayor conciencia fiscal.

Citation

Alarcón García, Gloria; Mayor Balsas, José Manuel and Quintanilla Domínguez, Claudia María (2022). "Fiscal Awareness and Participatory Budgeting: An Exploratory Study". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 177: 69-88. (doi: 10.5477/cis/reis.177.69)

Gloria Alarcón García: Universidad de Murcia | gloria@um.es

José Manuel Mayor Balsas: Universidad de Murcia | josemanuel.mayor@um.es

Claudia María Quintanilla Domínguez: EGADE (México) | claudia.quintanilla@tec.mx

INTRODUCTION

Tax compliance is a basic requirement for a tax system to be considered efficient and fair. Appropriate tax behaviour is both a symptom and a consequence of sound civic awareness (Delgado, 2009). Tax morale has traditionally been defined as the intrinsic motivation for individuals to pay taxes (Frey and Torgler, 2007; Torgler, 2005), or as the set of factors on which social permissiveness with respect of tax evasion depends (Prieto, Sanzo and Suárez, 2006). It alludes to situations where, faced with a level playing field, some taxpayers evade their tax obligations, while others always comply with them (Giachi, 2014). Fiscal awareness, however, is described as each citizen's individual perception of the tax ethics and tax morale of the society in which they live, which leads them to voluntary compliance with their tax obligations (Alarcón, Beyaert and Pablos, 2012). It is therefore a more rigorous and restrictive concept than the concept of tax morale. Individuals who have a high level of fiscal awareness pay their taxes voluntarily regardless of what others do, regardless of what the collective morale of the group considers should be done, and regardless of the individual's opportunities for tax fraud (Alarcón, Beyaert and Pablos, 2015).

Most studies that have linked tax compliance to citizen participation to date have focused either on social capital or on direct democracy. According to the literature, social capital, measured through its components (trust, social norms, and social networks) is positively related to tax morale (Alm and Gomez, 2008; Schelling, 1989; Torgler *et al.*, 2008), and there is also a relationship between these components. Transparency and accountability increase citizens' trust in institutions and the credibility afforded to them (Azar, Gerstenblüth and Rossi, 2010), something that is associated with higher tax morale (Arias, 2008)

and greater fiscal awareness (Martínez and Miquel, 2013). Moreover, the greater the trust, the more likely individuals are to participate in their community (Zmerli, Newton and Montero, 2007), and it seems reasonable to think that they are also more likely to be affiliated to political organisations. In general terms, it seems equally likely that people who trust political organisations tend to join them, and that people who join these organisations tend to place their trust in them. However, several studies have noted that the former statement has been found to have greater weight than the latter (Newton, 2001; Zmerli, Newton and Montero, 2007). Similarly, people who are more actively engaged in community life are less likely to condone tax evasion, even in private (Putnam, 2002). Associations instil in their members habits of cooperation and public spiritedness, as well as the practical skills needed to participate in public life (Almond and Verba, 1970; Putnam, 2002), and their members are much more likely than non-members to participate in politics and spend more time with their neighbours (Putnam, 1995). If organised membership is conducive to the development of democratic citizenship, it is to be expected that members of an organisation, unlike non-members, will be more confident in their ability or potential to influence government, more 'open' in their political views, and generally more committed to democratic values (Almond and Verba, 1970). Individuals who belong to political organisations demonstrate some civic behaviour, as politically interested citizens will tend to join and engage in debates, where they can identify the preferences of others, which reduces their justification for tax evasion (Sá, Martins and Gomes, 2014). Membership of political organisations can also facilitate participation, as being curious about politics often goes hand in hand with actual participation (Morales, 2001; Deth and Elff, 2004).

Studies on tax morale and direct democracy have also been limited to observing the differences between residing or not in regions with this kind of democratic system; empirical evidence has shown the existence of a positive and significant relationship between this type of democracy and the payment of taxes (Feld and Frey, 2002; Torgler, 2005; Torgler, Schneider and Schaltegger, 2010). This has entailed: 1) that the study of both variables to countries or regions where this type of democracy is in place has been limited; 2) that studies have been merely focused on the correlation between the variables of direct democracy and tax compliance; and 3) that individual participation of citizens has been put aside, given that only the existence or not of participatory instruments has been considered, not whether individuals actually participate in them. In Spain, while there are some mechanisms in place such as referendums and popular legislative initiatives, it is true that current legislation does not facilitate their frequent use (Subirats, 2001). However, in representative democracies, there are person-based participatory instruments or mechanisms available that are made up of various elements of direct or semi-direct democracy, such as participatory budgets (Cabannes, 2004a; Goldfrank, 2006).

Therefore, this paper seeks to make a small contribution to the field by providing empirical evidence about the topic. The intention is to fill the gap in the literature by testing the hypothesis that active participation in a participatory budgeting process potentially leads to individuals' greater fiscal awareness. The study has been structured as follows. Firstly, a brief review of the literature on participatory budgeting and its possible relationship with tax compliance is presented. An exploratory study is then proposed, including details of the objectives and hypotheses, the sample used, the variables and the model, and the results ob-

tained. The final section presents the conclusions, which summarise the most relevant aspects of the research.

BRIEF LITERATURE REVIEW

Participatory budgeting is a mechanism or process by which the population defines or contributes to defining how a portion of public resources is used (Cabannes, 2004a). It is a new form of decision-making that actively involves citizens in prioritising public spending (Goldfrank, 2006). It is a practice recommended by institutions, including the World Bank and the United Nations (Sintomer and Ganuza, 2011). In fact, it has been recognised by the UN as one of the "best practices" in urban planning (Schneider and Goldfrank, 2006), which currently has more than 3,000 experiences worldwide (Cabannes, 2017).

In general, participatory budgeting usually consists of three phases: the first is aimed at presenting the process, accounting for the decisions previously adopted and establishing the internal rules in a participatory manner; the second is targeted at gathering citizen proposals through deliberation in public assemblies; and the third is focused on prioritising these proposals (Ganuza, 2010). Citizens who participate in such processes increase their sense of group identity and solidarity, expand their social network, and contribute to community building (Allegretti, García-Leiva and Paño, 2011; Gilman, 2016a; Wampler, 2007).

The positive impact of participatory budgeting on municipal tax collection has been recognised in different studies. Most of these studies have focused on Brazilian regions (Biderman and Silva, 2007; Cabannes, 2004b; Schneider and Baquero, 2006; Spada, 2015; Touchton, Wampler and Peixoto, 2019), whereas others have verified this impact on African regions

(Cabannes, 2015; Mbera and Allegretti, 2014) and Russian regions (Beuermann and Amelina, 2014). In these cases, the authors concluded that the municipalities that implemented participatory budgets tended to have higher tax revenues than municipalities that did not use participatory budgeting. However, all these studies carried out a comparative analysis (regions with/without participatory budgeting) and at the institutional level (municipal tax collection), so they did not investigate the individual and subjective level.

What do such processes offer or contribute to individual citizens' propensity to pay their taxes? While in general terms citizen participation is associated with the strengthening of relations between public institutions and citizens, higher quality public policies, increase institutional trust, and the distancing of uncivic behaviours (Gramberger, 2001; Pino and Colino, 2003; Velásquez and González, 2003). The following three aspects will be the focus of participatory budgeting analysis here: 1) the trust in the institutions generated as a result of transparency and accountability; 2) the perceived efficiency of the ability to participate directly and personally in public management by deciding the how a portion of public resources is used; and 3) the lessons that can be learnt in the different phases of these processes. All of these were recognised by the Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017) as inherent principles of quality participatory budgeting.

Transparency and accountability are used by citizens in these processes to monitor and control how public money is spent (Harkins and Escobar, 2015). They contribute to improving the quality of democratic governance and reducing corruption, in particular when there are ways for citizens to control the execution of the budget and works (Cabannes, 2004a; Wampler, 2007). Accountability usually takes four forms: annual (or even more frequent) public hearings

during which political and technical officials report on the process; through brochures; by posting the information on the municipalities' web portals (Cabannes, 2004a); or during the various assemblies held. The fact that the population has access to this information, and that the authorities take the trouble to prepare and disseminate it, contributes to increasing transparency (Allegretti, García-Leiva and Paño, 2011; Sintomer, 2005), legitimacy and trust in institutions.

However, citizens would ideally like public spending to meet their demands, but since this is unlikely, it is essential that they feel that they have a say in deciding what funds are used for and how they are spent (Castañeda, 2015). Participatory budgeting improves the efficiency of public spending (Cabannes, 2004a), as individuals make their own suggestions to the administration, discuss and prioritise some of them by taking a vote. During the different phases, participants have discussions with their fellow citizens, bringing their different points of view to the table, providing an overall, comprehensive view of the various issues at stake, which seems to contribute specifically to solidarity and social justice (Cano, Mayor and Molina, 2020). Traditionally excluded citizens, therefore, have the opportunity and the right to participate in these new decision-making spaces (Gilman, 2016b; Wampler, 2007).

In this way, citizens not only participate by contributing their needs and common sense, but also by acquiring knowledge they did not previously have (Font, 2004). As a result of attending neighbourhood assemblies and meetings mediated and led by community facilitators, participants learn some lessons which transform inhabitants into "citizens", as they learn how institutions work, what the place they live in is like, what inequalities exist and, above all, how public resources are managed (Allegretti, García-Leiva and Paño,

2011; Wampler, 2007). There is evidence that citizens perceive high levels of transparency not only when they have access to budget information, but also when they understand it and experience shared meanings with other participants during these budget processes (Brun-Martos and Lapsley, 2017). Thus, participatory budgeting is not only a process of deliberation and decision-making, but also a space for informal education that promotes important learning experiences about citizenship and democracy (Lerner and Schugurensky, 2007).

These three aspects (institutional trust resulting from transparency and accountability, efficiency in terms of the possibility of participating in public management, and civic education) are in turn linked in the literature to a greater willingness to pay taxes (Arias, 2008; Barone and Mocetti, 2011; Martínez and Miquel, 2013; Newton, 2001). It therefore seems reasonable to think that participation in this type of process can (potentially) generate greater fiscal awareness in individuals.

METHODOLOGY

Objectives and hypotheses

The aim of this paper is to show that active involvement in a specific type of participatory budgeting process can lead to a greater willingness to voluntarily pay taxes. Therefore a structural equation model is used. In addition to testing this hypothesis of potential causality, the relationships that may exist between variables such as trust in institutions, social norms and membership of political associations are also included, given that, according to the literature, these do not appear to be independent variables. A number of hypotheses are considered here, bearing in mind at all times that causality refers to potential causality, not causality in the strict sense. These are:

- H₁: Actively participating in a quality participatory budgeting process leads to greater fiscal awareness;
- H₂: Greater trust in institutions leads to greater fiscal awareness;
- H₃: Greater acceptance of social norms leads to greater fiscal awareness;
- H₄: Belonging to a political organisation leads to greater fiscal awareness;
- H₅: Increased trust in institutions leads to increased participation in participatory budget processes;
- H₆: Greater trust in institutions influences membership of a political organisation;
- H₇: Belonging to a political organisation leads to involvement in a participatory budgeting process.

Sample

The local level is the most appropriate one for the study of the participation of individuals, since the opportunities for effective citizen participation are greater than at other levels (Almond and Verba, 1970). It is also the level where the vast majority of participatory budgets take place. For this reason, it was considered appropriate to select a Spanish municipality in which an ambitious participatory budget of a specific type was being used, as well as one with a history of participation. The municipality of Molina de Segura (Murcia Region) was selected. It has a population of approximately 72,000, and a pioneering citizens' movement has been particularly noteworthy. In 2017 Molina de Segura had a participatory budget of 4,000,000 euros (equivalent to 6.89% of its municipal budget). The participatory process complied with the 13 quality principles proposed by the Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017). In that year, 4,086 citizens voted, which accounted for 7.67%, of the 53,260 citizens eligible to participate. It was a self-regulated process, that is, between six and

eight meetings are held beforehand in which citizens themselves can draw up the rules to be followed throughout the project. There are usually around 50-60 face-to-face assemblies per year, which include information and prioritisation sessions. This is a mostly face-to-face process, where even when most of the participants took their vote, around 65%, voted face-to-face. Furthermore, in the interest of greater transparency, accountability sessions are regularly held for previous projects, both in social centres and in the Local Citizen Participation Boards.

Generally speaking, the individuals who tend to participate in public affairs are a small part of the population, so it is not advisable to use random, representative databases that do not consider and correct for this fact by introducing quotas in the sample. Previous studies on tax compliance and (political) participation that used national surveys from the European Values Study highlighted the inconsistencies that can occur in the results when these quotas are not considered, as it is impossible to

make a rigorous comparison between individuals who have a participatory profile and those with a non-participatory profile (Sá, Martins and Gomes, 2014).

Given that the intended sample was difficult to access, discretionary (or judgmental) sampling and convenience sampling were chosen. The questionnaire used was developed by the Tax Observatory of the University of Murcia and was administered in two modalities during the period 2016-2017: on paper, sent to members of different associations and to those attending the meetings and assemblies of the participatory budget process (discretionary sampling); and in digital format, published in different municipal social networks, in the media and on the website for the process (convenience sampling). Finally, the sample (Table 1) consisted of a total of 530 questionnaires from individuals residing in the municipality who were 16 years of age or older, of which 58.49% were collected in paper form, and the rest, 41.51%, in digital format.

TABLE 1. *Sample and municipal data*

	Sample		Municipality	
	N	Percentage	Population	Percentage
Age				
Between 16-30	66	12.45	12.620	23.70
Between 31-45	183	34.53	19.043	35.76
Between 46-60	181	34.15	12.495	23.46
Over 61 years old	100	18.87	9.101	17.09
Total	530	100.00	53.260	100.00
Sex				
Male	224	42.26	26.574	49.89
Female	306	57.74	26.686	50.11
Total	530	100.00	53.260	100.00
Participatory budget 2017				
Participants	150	28.30	4.086	7.67
Total	530	100.00	53.260	100.00

Note: Individuals must be at least 16 years old to participate, so the population under 16 has not been considered in the sample. Municipal data on age and sex from INE (2017).

Source: Developed by the authors.

Description of variables

Table 2 shows the descriptive statistics for the main variables used, taking into account the mean (which represented a proportion for the “common good, unjustified

fraud, participatory budget and political association” dichotomous ordinal variables) and the median, as statistics of central tendency, and the standard deviation and median absolute deviation as statistics of dispersion.

TABLE 2. *Descriptive statistics of the main variables*

	Comments	Mean	Median	Standard deviation	Median absolute deviation (MAD)
Fiscal awareness					
Common good	530	0.84	1.00	0.366	0.00
Unjustified fraud	530	0.79	1.00	0.404	0.00
Participatory budget					
Participatory budget	530	0.28	0.00	0.451	0.00
Institutional trust					
Parliament	530	3.93	4.00	2.580	2.00
Courts	530	4.72	5.00	2.765	2.00
Political Parties	530	2.71	2.00	2.087	1.00
State	530	3.95	4.00	2.570	2.00
Autonomous Regions.	530	3.51	3.00	2.411	2.00
City Council	530	3.86	4.00	2.473	2.00
Social norms					
Rubbish	530	9.82	10.00	0.754	0.00
Alcohol	530	9.70	10.00	0.893	0.00
Theft	530	9.78	10.00	0.821	0.00
Social networks					
Political organisation	530	0.11	0.00	0.315	0.00

Source: Developed by the authors.

Fiscal awareness

The concept of fiscal awareness was used to measure tax compliance. The question used to measure this in the questionnaire was as follows: “Q12. In your opinion, which of these two behaviours would be more reprehensible? (1) Someone fails to pay 6,000 € to the Treasury; (2) You are robbed of €100” (Alarcón, Quiñones and Sánchez, 2015). The first of the two possible answers relate to public morality in the sense that it is oriented towards serving the collective as opposed to the second option, which refers

to private morality, in which the rules are personal and sometimes opposed to the general ones. Therefore, fiscal awareness operates on two levels, an individual one related to the perceptions and cognitions of subjects about their contribution to their own well-being, and a contextual, environmental one, referring to their contribution to the common good. In this case, the variable has been recoded for analysis, so the “common good” variable has been given a score of “1” for individuals who chose the first of the options as the more reprehensible behaviour, and a score of “0” if they

chose the second. As this is a dichotomous ordinal variable between 0 and 1, the mean represents the proportion, so a mean of 0.84 is interpreted to mean that 84.2% of respondents considered the first of these behaviours to be more reprehensible, compared to the remaining 15.8% who believed the opposite.

In addition, the variable traditionally used to measure tax morale, which has been called “unjustified fraud”, was taken from the following question: “Q15. In your opinion, tax evasion is justified because (tick only one option): 1) What is paid to the State is excessive; 2) Those who have the most do not pay their fair share; 3) Fraud control is not effective; 4) Engaging in tax fraud does not harm anyone; 5) Tax fraud is not justifiable under any circumstances”. This variable has been dichotomised, taking a score of “1” if respondents chose answer 5, and “0” if they selected any of the other options. A total of 20.6% of respondents justified tax fraud in some way, while the remaining 79.4% rejected it.

Participatory budgeting

In order to find out whether or not the respondent had participated in the participatory budgeting process, the following questions were asked: “Q0. Did you personally and directly participate in the design of Molina’s budget in 2015, 2016, or 2017 by making proposals in the participatory budget process?” It is important to highlight the part that refers to “personally and directly participate by making proposals”, since only those who met these requirements would tick the “yes” option. They were the most actively involved in the process, as they had attended the previous meetings, had participated in the design of the self-regulations, and/or had attended the different assemblies held; therefore, those individuals who had only participated by voting on the proposals on the appointed

day were left out. In this way, the “participatory budget” variable would have a score of “1” if respondents said that they had participated in this process, and of “0” if they had not. Its mean value -0.28 indicated that 28.3% of respondents had participated in the participatory budget process personally and directly, compared to 71.7% who had not.

Institutional trust

This study considers institutional trust as opposed to other types of trust because this variable has been present in several studies on tax morale (Azar, Gerstenblüth and Rossi, 2010; Giachi, 2014). On this occasion, respondents were asked: “Q19. Please rate your level of trust from 1 to 10, where 1 = no trust at all and 10 = very much trust, in the following institutions: 1) The parliament; 2) The courts/justice system; 3) Political parties; 4) The State; 5) Your Autonomous Region (A.R.); 6) Your City Council”. Thus, the scores for each of these variables would range from 1 (not trusting the relevant institution at all) to 10, which is equivalent to having a high level of trust in the relevant institution.

Social norms

Although social norms have not been as widely used in the literature as institutional trust, they have been considered in several studies (Azar, Gerstenblüth and Rossi, 2010). The following item was used to test its effect: “Q14. For each of the following statements, please indicate whether you believe that it is always justified, or not justified at all on a scale of 1 to 10, where 1 = never justified and 10 = always justified: 1) Throwing rubbish in a public space; 2) Driving under the influence of alcohol; 3) Stealing an accessory item. Since scores ranged from 1 to 10, 1 being not at all justified and 10 always justified, and the statements involved non-acceptance of social

norms, reverse recoding of the variables was carried out. Thus, the variables were presented on a scale of 1 to 10, where 1 corresponded to non-acceptance of the social norm in question and meant to acceptance of the social norm.

Social networks

The “political organisation” variable was used to capture whether or not individuals belonged to such organisations. This variable was given a score of 1 if the individual

belonged to a political organisation and 0 if the individual did not. In this respect, 11.1% of respondents said they belonged to a political organisation, compared to 88.9% who said they did not.

Once the main variables had been analysed, it was considered appropriate to segment each of them according to two criteria: whether or not the individuals had actively participated in the participatory budget, and whether or not the respondents belonged to any political organisation (Table 3).

TABLE 3. *Comparison of means*

	Active engagement in participatory budgeting		Membership of a political organisation	
	Yes (N=150)	No (N=380)	Yes (N=59)	No (N=471)
Fiscal awareness				
Common good	0.93	0.81	0.97	0.83
Unjustified fraud	0.87	0.77	0.83	0.79
Participatory budget				
Participatory budget	1.00	0.00	0.49	0.26
Institutional trust				
Parliament	4.43	3.74	5.07	3.79
Courts	5.00	4.62	5.02	4.69
Political Parties	3.04	2.58	4.22	2.52
State	4.33	3.81	4.53	3.88
Autonomous Regions	3.91	3.36	4.05	3.45
City Council	4.25	3.71	5.14	3.70
Social norms				
Rubbish	9.79	9.84	9.73	9.83
Alcohol	9.73	9.70	9.66	9.71
Theft	9.83	9.77	9.66	9.80
Social networks				
Political organisation	0.19	0.08	1.00	0.00

Source: Developed by the authors.

Model

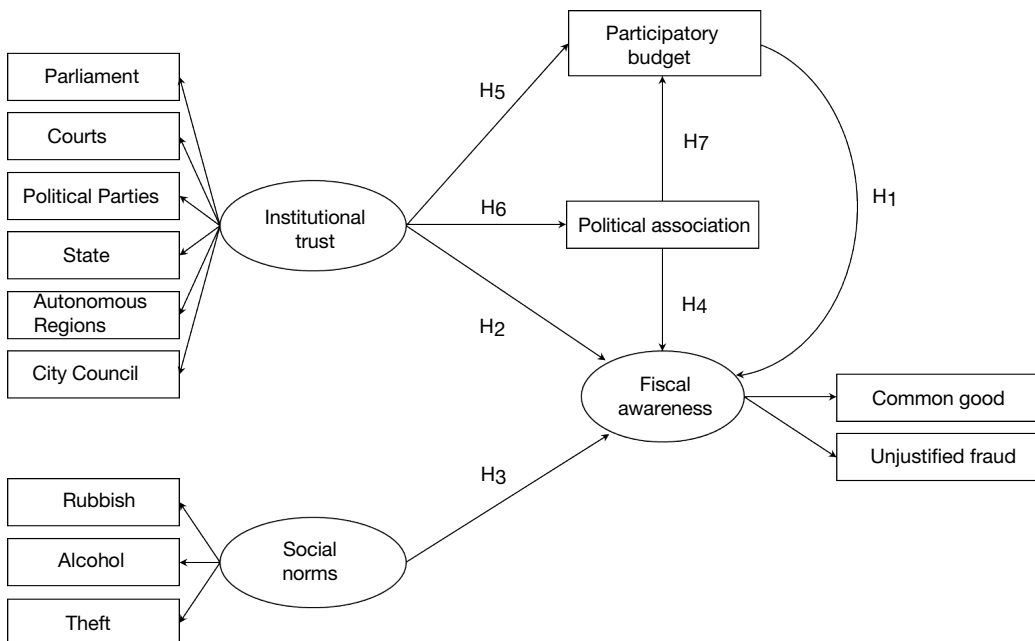
While multiple regression analyses abound in the tax compliance literature, structural equation modelling allows for the simul-

taneous examination of a number of dependency relationships, thus providing the researcher with the ability to fit multiple cross-dependent relationships into a single model.

Figure 1 shows the conceptual model or sequence diagram proposed for this confirmatory analysis together with the hypotheses to be tested. There were three latent variables: fiscal awareness, institutional trust, and social norms. A latent variable is an assumed, unobserved concept that can only be approached through measurable or observable variables. The observed variables (which in this case were collected through the questionnaire) are known as manifest variables. Why would one want to use an unmeasured latent variable instead of exact data (manifest variables) provided by respondents? Although this may seem pointless, it has both practical and theoretical justifications, as it improves statistical estimation, improves the representation of theoretical concepts

and takes measurement error into account (Hair *et al.*, 1999). The latent variable “fiscal awareness” was constructed through two previously defined observable variables: the perception of the “common good” and the lack of justification for tax fraud (“unjustified fraud”). For the latent variable “institutional trust”, the observed variables referring to trust in “parliament”, “the courts”, “political parties”, “the State”, “Autonomous Regions” and the “Local Council” were used. Finally, for the latent variable “social norms”, the variables “rubbish”, “alcohol” and “theft” were used. Two observed variables were also included in the model: active participation in the ‘participatory budgeting’ process and membership or non-membership of a “political organisation”.

FIGURE 1. Conceptual model



Source: Developed by the authors.

However, prior to carrying out a structural analysis and confirming that the proposed conceptual model was appropriate and that the hypotheses are verified, a series of tests must be carried out and certain criteria must be borne in mind with regard to the measurement model. Tests were therefore conducted to evaluate both convergent validity and divergent or discriminant validity.

Results and discussion

The results obtained with regard to the measurement model are shown below, both for convergent validity tests and for divergent or discriminant validity tests after performing a confirmatory factor analysis.

This procedure and the confirmation of the structural model were carried out using IBM® SPSS® Amos 24.0.0 software. To check convergent validity the three criteria proposed by Hair *et al.*, (1999) were used: the reliability of the items of each construct (factor loadings), the average variance extracted (AVE), and the reliability of the construct, using the fit indices suggested by Fornell and Larcker (1981), Hair *et al.*, (1999), Hjorth (1994) and Nunnally (1978) to assess model fit - factor loadings >0.7, AVE >0.5 and construct reliability >0.7 - (Table 4).

The tests developed by Anderson and Gerbing (1988) and Fornell and Larcker (1981) were then carried out in order to test the divergent or discriminant validity of the proposed model (Tables 5 and 6).

TABLE 4. *Convergent validity*

	Est. L_i	(1) Factorial loading	(2) VPE		(3) Reliability of construct			
			L_i^2	Indicator	ΣL_i	$(\Sigma L_i)^2$	e_i estimate	Σe_i
Fiscal awareness			0.644	1.592	2.534		0.712	0.781
Common good	0.693	≈0.7	0.480				0.520	
Unjustified fraud	0.899	>0.7	0.808				0.192	
Institutional trust			0.620	4.708	22.165		2.279	0.907
Parliament	0.778	>0.7	0.605				0.395	
Courts	0.713	>0.7	0.508				0.492	
Political Parties	0.720	>0.7	0.518				0.482	
State	0.878	>0.7	0.771				0.229	
Autonomous Regions	0.872	>0.7	0.760				0.240	
City Council	0.747	>0.7	0.558				0.442	
Social norms			0.623	2.359	5.565		1.130	0.831
Rubbish	0.845	>0.7	0.714				0.286	
Alcohol	0.688	≈0.7	0.473				0.527	
Theft	0.826	>0.7	0.682				0.318	

Source: Developed by the authors.

TABLE 5. Correlation criterion between Anderson and Gerbing constructs (1988)

	χ^2	DF	$\Delta\chi^2$	ΔDF	p
Initial model	226.919	41	—	—	—
Fiscal awareness and Institutional confidence = 1	475.997	42	249.078	1	< 0.00001
Fiscal awareness and Social norms = 1	483.762	42	256.843	1	< 0.00001
Institutional trust and Social norms = 1	833.902	42	606.983	1	< 0.00001

Note: DF = Degrees of freedom; χ^2 = Difference between the χ^2 of the tested model and the χ^2 of the initial model; ΔDF = Difference between the degrees of freedom of the tested model and the degrees of freedom of the initial model.

Source: Developed by the authors.

TABLE 6. Fornell and Larcker's (1981) test

	Correlation between constructs		Min. AVE between constructs
	Estimate	Estimate ²	
Fiscal awareness and Institutional confidence = 1	0.205	0.042	0.620
Fiscal awareness and Social norms = 1	0.109	0.012	0.623
Institutional trust and Social norms = 1	0.027	0.001	0.620

Source: Developed by the authors.

TABLE 7. Final model coefficients

	B_j	b_j	SE	t	p
P. budgets → Fiscal awareness	0.143	0.094	0.033	2.859	0.004
Institutional trust → Fiscal awareness	0.173	0.026	0.008	3.267	0.001
Social norms → Fiscal awareness	0.109	0.048	0.023	2.059	0.040
Political organisation → Fiscal awareness	0.060	0.056	0.047	1.206	0.228
Institutional trust → P. budgets	0.099	0.022	0.010	2.182	0.029
Institutional trust → Political organisation	0.144	0.023	0.007	3.187	0.001
Political organisation → P. budgets	0.150	0.214	0.062	3.464	0.000

Note: B_j = Standardised coefficients for each construct; b_j = Unstandardised coefficients for each construct; SE = Standard error; t = Critical ratio = b_j/ET = statistical test of the significance of each construct.

Source: Developed by the authors.

Once the reliability, convergent validity and divergent or discriminant validity had been ratified, it was proven that 1) all the items observed must form part of the latent variables, so none of them was discarded; and that 2) these latent variables were different from each other. Therefore, in view of the results, it was considered appropriate

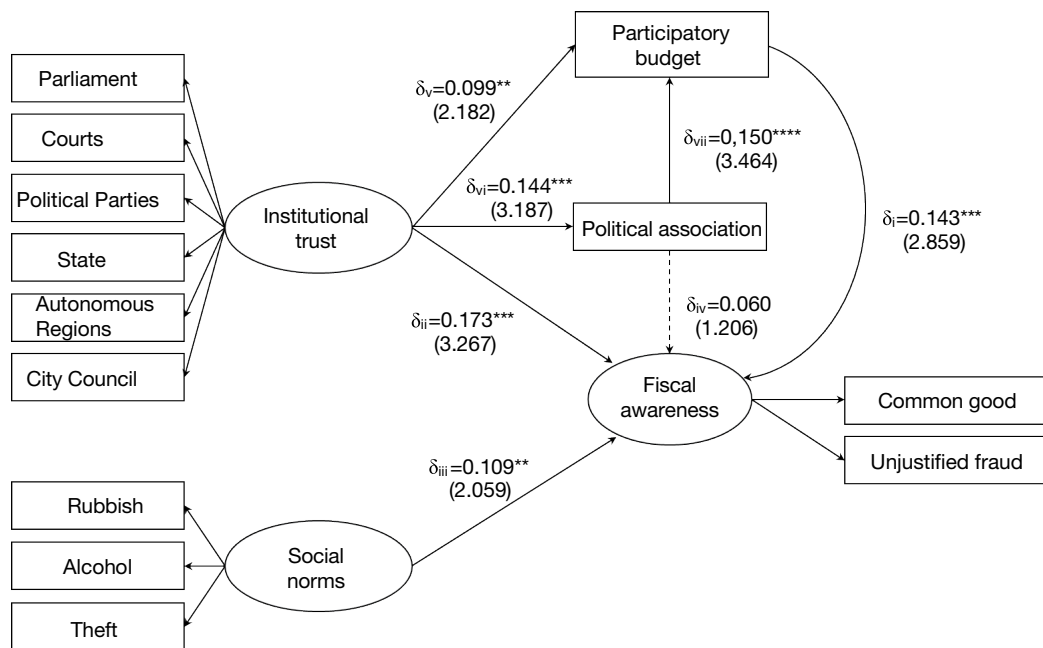
to perform structural equation modelling using a maximum-likelihood covariance approach. The results of the model are shown below.

Table 7 shows the standardised and unstandardised coefficients, the standard error, the t-test or critical ratio, and the corresponding p-value for each estimator.

The “p-value” in the table above indicates the level of statistical significance of the estimators, and these results are also shown in Figure 2. Here, the solid arrows denote the hypotheses that were sup-

ported by the findings, and the dashed arrows denote the hypotheses that were not supported, with the results of the “t-test” in brackets. In this case it can be seen that six of the seven estimators were significant.

FIGURE 2. Results of the proposed conceptual model



Note: Significance of coefficients indicated by: * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$; **** $p < 0,001$.

Source: Developed by the authors.

It was therefore demonstrated from the available data how actively engaging in participatory budgeting processes potentially has a direct and positive influence on individuals’ fiscal awareness (H_1 , $p < 0.01$). This type of process, as mentioned at the beginning of this paper, generates trust in institutions among individuals as a result of the transparency and accountability that take place in the different phases of the process. Recent studies have shown how participatory budgeting without transparency

is totally counterproductive, since it decreases the likelihood of tax compliance (Park, 2020). Furthermore, the fact that participating individuals are aware that municipal resources are used efficiently may lead to a greater willingness to pay their taxes (Barone and Mocetti, 2011; Martínez and Sanz, 1999); while a greater degree of understanding and knowledge of how public revenues and expenditures work also leads to a greater willingness to comply with tax obligations (Martínez and Miquel, 2013).

Regarding the secondary variables, both trust in institutions and following social norms potentially have a direct and positive influence on fiscal awareness (H_2 , $p < 0.01$; H_3 , $p < 0.05$). Perceptions of trust in institutions and satisfaction with the functioning of institutions serve as a heuristic for assessing tax policy. When there is trust in institutions, taxpayers' behaviour will be inclined towards tax compliance, resulting in a greater willingness to pay taxes (Arias, 2008; Bedoya and Vásquez, 2010). Acceptance and internalisation of social norms were found to influence the motivation to pay taxes, a result that is in line with other studies, such as the one proposed by Dulleck *et al.* (2016). The hypothesis that alluded to the influence that belonging to a political organisation may have on fiscal awareness (H_4) was not satisfactorily tested, although it was found to have an indirect effect on fiscal awareness through the "participatory budget" variable.

With regard to the relationships between the secondary variables, it was confirmed that both trust in institutions and membership of a political organisation influenced individuals' active participation in the participatory budgeting process (H_5 , $p < 0.05$ and H_7 , $p < 0.001$ respectively). The fact that the process was binding implies that the institution (in this case the City Council) was obliged to accept the results voted by citizens and committed to implement each and every one of the investments and programmes prioritised by citizens, which reinforced trust in the institution itself. It would be incomprehensible if in a process where citizens are required to donate their precious time the agreements and outcomes reached had no subsequent effect. As for the result concerning political organisation, this was in line with the study by Verba, Scholzman and Brady (1995), which observed that those individuals who showed a concern for politics were more predisposed to participa-

tion. Finally, trust in institutions influenced membership of political organisations (H_6 , $p < 0.01$), since, as stated in the literature, people who trust institutions tend to join associations more (Newton, 2001; Zmerli, Newton and Montero, 2007).

The model yielded a fit index of χ^2 308.532 with 59 degrees of freedom. However, in practice, the value of χ^2 is very sensitive to sample size, so the ratio of χ^2 to degrees of freedom (Hair *et al.*, 1999) is recommended as the best goodness-of-fit measure. The common level of this ratio is set to be less than 5. In the proposed model this value was 5.229, which, while exceeding the common level, was close to it. As for the rest of the goodness-of-fit indicators, the GFI (0.920), CFI (0.920), TLI (0.894) and NFI (0.903) met the requirement of being above the 0.900 level, with the exception of TLI, although it was very close to the recommended level. Finally, an optimal level for the RMSEA would be 0.050 or lower, although values between 0.050 and 0.080 are considered acceptable (Hair *et al.*, 1999). In this case, the value obtained was 0.089, which was close to the recommended maximum but exceeded it. Therefore, by comparing the values obtained with the corresponding critical values, it can be concluded that they suggest that the hypothesised model fitted the empirical data.

However, these results, as is the case in most social science work, must be taken with caution, as the study has a number of limitations. Firstly, the method used for sample collection does not allow for generalisability of the results. Secondly, the use of surveys and dealing with tax issues may lead to social desirability and to respondents giving answers that may not be completely honest. Thirdly, as far as the measurement of the constructs is concerned, it should be remembered that variables that were not observable through the constructs such as fiscal awareness, trust in

institutions, and social norms were measured. While an effort has been made to obtain valid and reliable indicators (and according to the structural equations measurement model, this has been the case) these are only an approximation. Fourthly, the variable referring to fiscal awareness in the structural model presented has been measured on the basis of two indicators, the common good and non-justification of tax evasion, although it is advisable to use at least three indicators. However, to date, there is no scale to appropriately measure fiscal awareness. Finally, the participatory budget variable did not measure intensities. An attempt was made to compensate for this by including a question regarding “personal and direct participation by making proposals”, although it is true that it considered participatory and highly participatory individuals to be the same. This was also true when considering membership or non-membership of political organisations, as the role of individuals within them was not being considered.

CONCLUSIONS

The impact of participatory budgeting on citizens' propensity and willingness to pay their taxes is an unexplored field. While previous studies have linked the implementation of these processes to increased municipal tax revenues, this paper aims to go a step further by focusing on fiscal awareness and effective individual participation. Based on a sample of 530 questionnaires collected in a municipality with a specific history of participation, and after carrying out a structural equation model, it was concluded that active participation in the participatory budget potentially had a direct and positive influence on the fiscal awareness of individuals.

Therefore, would the implementation of this mechanism at the local level be suffi-

cient to increase the fiscal awareness of individuals living in the municipality? The answer is no, as the existence *per se* of these processes would be a necessary, but not a sufficient requirement. In other words, the effects of this participatory instrument, such as the increase in institutional trust resulting from transparency and accountability, the perception of efficiency given the possibility of deciding on the management of public resources, and learning about the functioning and behaviour of institutions, only have an effect on the fiscal awareness of the individuals who make use of it.

Based on this result, policy makers could, in principle, increase fiscal awareness (leading to an increase in tax revenues) not only by making this participatory mechanism available to the public, but also by widely promoting and encouraging its use. It could also be a good public policy, as is the case in an increasing number of municipalities, to implement it in schools, since the generational thesis holds that participation experienced by young people during their formative years has a lasting and persistent impact that manifests itself in political processes. Therefore, it is essential to foster participation at an early age (Hooghe, 2003; Jennings, 1987).

The findings highlight the importance of actively engaging citizens in the public sphere, and demonstrate that there are alternative instruments to tax audits and penalties to influence tax compliance. In future research, however, while considering the aforementioned limitations, it would be interesting to replicate the analysis in other municipalities and regions with different and similar participatory budgets in terms of types of participation, amounts, intensity, etc.; to enrich and complement the study with a qualitative analysis, with in-depth interviews and focus groups; and to conduct further research on whether the propensity to pay taxes refers exclusively to local taxes or generally to taxes as a whole.

BIBLIOGRAPHY

- Alarcón, Gloria; Beyaert, Arielle and Pablos, Laura de (2012). "Fiscal Awareness: A Study of Female versus Male Attitudes towards Tax Fraud in Spain". In: Pickhardt, M. and Prinz, A. (eds.). *Tax Evasion and the Shadow Economy*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Alarcón, Gloria and Ayala, Edgardo A. (2013). "Trust in Spanish Governments: Antecedents and Consequences". *Economic Analysis and Policy*, 43(2): 177-193. doi: 10.1016/S0313-5926(13)50017-8
- Alarcón, Gloria; Quiñones, Elena and Sánchez, Julio (2015). "How Can Have an Influence to Be a Housewife on Women's Fiscal Awareness? The Case of Spain". *Anales de Psicología*, 31(3): 952-961. doi: 10.6018/analesps.31.3.194961
- Allegretti, Giovanni; García-Leiva, Patricia and Paño, Pablo (2011). *Viajando por los presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos y aprendizajes*. Málaga: Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).
- Alm, James and Gómez, Juan L. (2008). "Social Capital and Tax Morale in Spain". *Economic Analysis and Policy*, 38(1): 73-87. doi: 10.1016/S0313-5926(08)50007-5
- Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney (1970). *La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones*. Madrid: Fundación Foessa.
- Anderson, James C. and Gerbing, David W. (1988). "Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach". *Psychological Bulletin*, 103(3): 411-423. doi: 10.1037/0033-2909.103.3.411
- Arias, Roberto J. (2008). "Comentarios sobre 'Determinantes de la Moral Tributaria en la Provincia de Buenos Aires', by Germán Antequera and Marcelo Florensa". *Serie Anales de La Asociación de Economía Política*, November, 16-20.
- Azar, Karina; Gerstenblüth, Mariana and Rossi, Máximo (2010). "Moral fiscal en el Cono Sur". *Desarrollo y Sociedad*, 65: 43-69. doi: 10.13043/dys.65.2
- Barone, Guglielmo and Mocetti, Sauro (2011). "Tax Morale and Public Spending Inefficiency". *International Tax and Public Finance*, 18(6): 724-749. doi: 10.1007/s10797-011-9174-z
- Bedoya, Andrea and Vásconez, Byron (2010). "Entendiendo la moral tributaria en Ecuador". *Fiscalidad. Revista Institucional del Servicio de Rentas Internas*, 5: 91-132.
- Beuermann, Diether W. and Amelina, Maria (2014). *Does Participatory Budgeting Improve Decentralized Public Service Delivery?* Inter-American Development Bank. (Working Paper Series No. IDB-WP-547).
- Biderman, Ciro and Silva, Glauco P. da (2007). *Estimating the Impact of Participatory Budget on Observed Outcomes*. Communication presented at XXXV Encontro Nacional de Economia, Brasil.
- Brun-Martos, María I. and Lapsley, Irvine (2017). "Democracy, Governmentality and Transparency: Participatory Budgeting in Action". *Public Management Review*, 19(7): 1006-1021. doi: 10.1080/14719037.2016.1243814
- Cabannes, Yves (2004a). *¿Qué es y cómo se hace el presupuesto participativo? 72 respuestas a preguntas frecuentes sobre presupuestos participativos municipales*. Quito: UN-Hábitat.
- Cabannes, Yves (2004b). *Presupuestos participativos: marco conceptual y análisis de su contribución a la gobernanza urbana y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Quito: ONU-Hábitat.
- Cabannes, Yves (2015). "The Impact of Participatory Budgeting on Basic Services: Municipal Practices and Evidence from the Field". *Environment and Urbanization*, 27(1): 257-284. doi: 10.1177/0956247815572297
- Cabannes, Yves (2017). "The Role of Participatory Budgeting and its Specific Contribution to Building 'Another Possible City'". In: Cabannes, Y. (ed.). *Another City is Possible with Participatory Budgeting*. Montreal/New York/London: Black Rose Books.
- Cano, José A.; Mayor, José M. and Molina, José (2020). "Desde el realismo político a la participación ciudadana: el presupuesto participativo de Molina de Segura". In: Cabannes, Y.; Mayor, J. M. and Molina, J. (coords.). *Presupuestos participativos: aportes y límites para radicalizar la democracia*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Castañeda, Víctor M. (2015). "La moral tributaria en América Latina y la corrupción como uno de sus determinantes". *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(224): 103-132. doi: 10.1016/S0185-1918(15)30005-2
- Delgado, María L. (2009). *¿Por qué una educación fiscal? En La experiencia educativa de la admi-*

- nistración tributaria española* (pp. 11-18). Documentos Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (Doc. N.º 13/09).
- Deth, Jan W. van and Elff, Martin (2004). "Politicalisation, Economic Development and Political Interest in Europe". *European Journal of Political Research*, 43(3): 477-508. doi: 10.1111/j.1475-6765.2004.00162.x
- Dulleck, Uwe; Fooker, Jonas; Newton, Cameron; Ristl, Andrea; Schaffner, Markus and Torgler, Benno (2016). "Tax Compliance and Psychic Costs: Behavioral Experimental Evidence Using a Physiological Marker". *Journal of Public Economics*, 134: 9-18. doi: 10.1016/j.jpube.2015.12.007
- Feld, Lars P. and Frey, Bruno S. (2002). "Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated". *Economics of Governance*, 3(2): 87-99. doi: 10.1007/s101010100032
- Font, Joan (2004). "Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y metodologías". In: Ziccardi, A. (ed.). *Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local*. México D.F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/Instituto Nacional de Desarrollo Social/Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
- Fornell, Claes and Larcker, David F. (1981). "Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error". *Journal of Marketing Research*, XVIII: 39-50. doi: 10.1177/002224378101800104
- Frey, Bruno S. and Torgler, Benno (2007). "Tax Morale and Conditional Cooperation". *Journal of Comparative Economics*, 35: 136-159. doi: 10.1016/j.jce.2006.10.006
- Ganuzza, Ernesto (2010). "Novos Instrumentos de Participação: entre a participação e a deliberação". In: Moreira, E. and Schettini, E. (eds.). *Experiências internacionais de participação*. São Paulo: UFMG.
- Giachi, Sandro (2014). "Social Dimensions of Tax Evasion: Trust and Tax Morale in Contemporary Spain"/"Dimensiones sociales del fraude fiscal: confianza y moral fiscal en la España contemporánea". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 145: 73-98. doi: 10.5477/cis/reis.145.73
- Gilman, Hollie R. (2016a). *Democracy Reinvented Participatory Budgeting and Civic Innovation in America*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Gilman, Hollie R. (2016b). *Engaging Citizens: Participatory Budgeting and the Inclusive Governance Movement within the United States*. Cambridge, Massachusetts: Ash Center Occasional Papers Series, Harvard University.
- Goldfrank, Benjamin (2006). "Los procesos de presupuesto participativo en América Latina: éxito, fracaso y cambio". *Revista de Ciencia Política*, 26(2): 3-28. doi: 10.4067/S0718-090X2006000200001
- Gramberger, Marc (2001). *Citizens as partners: OECD handbook on information, consultation and public participation in policy-making*. Paris: OECD.
- Hair, Joseph F.; Anderson, Rolph E.; Tatham, Roland L. and Black, William C. (1999). *Análisis multivariante*. Madrid: Prentice Hall. (5th ed.).
- Harkins, Chris and Escobar, Oliver (2015). *Participatory Budgeting in Scotland: An Overview of Strategic Design Choices and Principles for Effective Delivery*. Glasgow Centre for Population Health and What Works Scotland, Glasgow.
- Hjorth, Urban J. S. (1994). *Computer Intensive Statistical Methods: Validation Model Selection and Bootstrap*. London: Chapman & Hall.
- Hooghe, Marc (2003). "Participation in Voluntary Associations and Value Indicators: The Effect of Current and Previous Participation Experiences". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 32(1): 47-69. doi: 10.1177/0899764003251198
- INE (2017). *Padrón continuo, datos por municipios*. Available at: <http://www.ine.es/>, access June 20, 2017.
- Jennings, M. Kent (1987). "Residues of a Movement: The Aging of the American Protest Generation". *The American Political Science Review*, 81(2): 367-382. doi: 10.2307/1961957
- Lerner, Josh and Schugurensky, Daniel (2007). "La dimensión educativa de la democracia local: el caso del presupuesto participativo". *Revista Temas y Debates*, 13: 157-159.
- Martínez, Marcelino and Sanz, José F. (1999). *La percepción del gasto público en el cumplimiento fiscal: contrastación empírica de la Hipótesis de Falkinger*. Instituto de Estudios Fiscales. (Papeles de Trabajo No.02/99).
- Martínez, José A. and Miquel, Ana B. (2013). "Instrumentos clave en la lucha contra el fraude: la importancia de la educación fiscal". *Crónica Tributaria*, 146: 179-192.
- Mbera, Emmy and Allegretti, Giovanni (2014). "Participatory Budgeting and the Budget Process in the South Kivu Province". In: Dias, N. (ed.). *Hope*

- for Democracy. 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide. São Brás de Alportel: In Loco Association.
- Morales, Laura (2001). "Participación política y pertenencia a grupos políticos: los límites de las explicaciones individuales y la necesidad de considerar el contexto político". *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 94: 153-184. doi: 10.2307/40184316
- Newton, Kenneth (2001). "Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy". *International Political Science Review*, 22(2): 201-214. doi: 10.1177/0192512101222004
- Nunnally, Jum C. (1978). *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill. (2nd edition).
- Park, Yaerin (2020). *Participatory Budgeting and Willingness to Pay Taxes: Evidence from an Exploratory Sequential Mixed Methods Study*. Cordes, Joseph J. (dir.), Washington: George Washington University. [Doctoral Thesis].
- Pino, Eloisa del and Colino, César (2003). *Las nuevas formas de participación en los gobiernos locales*. Madrid: Fundación Alternativas.
- Portuguese Network of Participatory Municipalities (2017). *Charter of Quality for Participatory Budgeting in Portugal*. Portugal: Portugal Participa.
- Prieto, Juan; Sanzo, María J. and Suárez, Javier (2006). "Análisis económico de la actitud hacia el fraude fiscal en España". *Hacienda Pública Española*, 177: 107-128.
- Putnam, Robert D. (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital". *Journal of Democracy*, 6(1): 65-78. doi: 10.1353/jod.1995.0002
- Putnam, Robert D. (2002). *Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Sá, Cristina; Martins, António and Gomes, Carlos (2014). "The Influence of Demographic Factors and Risk Aversion on Tax Morale: A Multi-Group Analysis". *European Journal of Research on Education*, 2(2): 82-93. doi: 10.15527/ejre.201426251
- Schelling, Thomas C. (1989). *Micromotivos y macroconducta*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Schneider, Aaron and Baquero, Marcelo (2006). *Get What You Want, Give What You Can: Embedded Public Finance in Porto Alegre*. Working Paper Centre for the Future State and the Institute of Development Studies. (IDS Working Paper 266).
- Schneider, Aaron and Goldfrank, Benjamin (2006). "Construcción institucional competitiva: el PT y el Presupuesto Participativo de Rio Grande do Sul". In: Lubambo, C.; Coêlho, D. and Melo, M. (eds.). *Diseño institucional y participación política: experiencias en el Brasil contemporáneo*. Buenos Aires: CLACSO.
- Sintomer, Yves (2005). "Los presupuestos participativos en Europa: retos y desafíos". *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 31: 1-17.
- Sintomer, Yves and Ganuza, Ernesto (2011). *Democracia participativa y modernización de los servicios públicos: Investigación sobre las experiencias de presupuesto participativo en Europa*. Paris: Transnational Institute.
- Spada, Paolo (2015). *The Political and Economic Effects of Brazilian Participatory Budgeting*. (Working Paper).
- Subirats, Joan (2001). "Nuevos mecanismos participativos y democracia: promesas y amenazas". In: Font, J. (ed.). *Ciudadanos y decisiones públicas*. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- Torgler, Benno (2005). "Tax Morale and Direct Democracy". *European Journal of Political Economy*, 21(2): 525-531. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002
- Torgler, Benno; Schneider, Friedrich and Schaltegger, Christoph A. (2010). "Local Autonomy, Tax Morale, and the Shadow Economy". *Public Choice*, 144(1): 293-321. doi: 10.1007/s11127-009-9520-1
- Torgler, Benno; Demir, Ihsan C.; Macintyre, Alison and Schaffner, Markus (2008). "Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation". *Economic Analysis and Policy*, 38(2): 313-339. doi: 10.1016/S0313-5926(08)50023-3
- Touchton, Michael; Wampler, Brian and Peixoto, Tiago (2019). *Of Governance and Revenue Participatory Institutions and Tax Compliance in Brazil*. (World Bank Policy Research Working Paper 8797). doi: 10.1596/1813-9450-8797
- Velásquez, Fabio and González, Esperanza (2003). *¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?* Bogotá: Fundación Corona.
- Verba, Sidney; Schlozman, Kay L. and Brady, Henry (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wampler, Brian (2007). "A Guide to Participatory Budgeting". In: Shah, A. (ed.). *Handbook on Participatory Governance*. Washington, D.C.: The World Bank.

Zmerli, Sonja; Newton, Kenneth and Montero, José R. (2007). "Trust in People, Confidence in Po-

litical Institutions, and Satisfaction with Democracy". In: Deth, J. W. van; Montero, J. R. and Westholm, A. (eds.). *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis*. New York: Routledge.

RECEPTION: April 20, 2020

REVIEW: September 12, 2020

ACCEPTANCE: January 8, 2021